

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 4 ° Juzgado de Letras Civil de
Antofagasta
CAUSA ROL : C-422-2021
CARATULADO : COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES
CONTINENTAL S.A./SOCIEDAD AGUAS ANTOFAGASTA S.A.

Antofagasta, uno de Septiembre de dos mil veintidós

VISTOS:

A folio 1, con fecha 16 de febrero de 2021, comparece doña Vanessa Pérez Hidalgo, abogada, cédula de identidad 16.163.289-9; María Inés Zegers de Pereira E-maia Plicque, abogada, cédula nacional de identidad número 16.939.155-6 y Jorge Entrala Rivera, abogado, cédula de identidad número 17.645.219-6, todos en representación, según se acreditará de **Compañía de Seguros Generales Continental S.A.** en adelante "**Continental**" sociedad del giro de su denominación, representada por **Andrés Mendieta Valenzuela**, cédula de identidad 9.522.507-1; domiciliados para estos efectos en calle La Concepción N° 165, oficina 403, comuna de Providencia, ciudad de Santiago e interpone demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios, accionando por la vía de subrogación del seguro en contra de **Aguas de Antofagasta S.A.**, Rol único Tributario número 99.540.870-8, representada legalmente por don Carlos Méndez Gallo, ignora cédula de identidad o por quien lo reemplace o subroque en el cargo, todos con domicilio en avenida Pedro Aguirre Cerda número 6496, comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta, por los daños que experimentó el asegurado de su mandante **Ruta del**



Loa Sociedad Concesionaria S.A. (en adelante indistintamente "Ruta del Loa" y/o "la Concesionaria y/o "El Asegurado"), y por consiguiente su representada **Continental**, daños que fueron consecuencia directa del proceder negligente de la demandada que consistió en que una cañería de agua de su propiedad produjo un hundimiento en la carretera que fue el causante de un accidente de tránsito con resultado de muerte.

Señala que su representada y la asegurada se hallaban vinculadas al momento del siniestro, por un contrato de seguros de responsabilidad civil, singularizado en la póliza número 218100799, con vigencia desde el día 15 de Junio del 2018 hasta el 15 de Diciembre del 2019.

En cuanto a su legitimación activa, cita y transcribe, el artículo 534 del Código de Comercio, señalando que al ser una subrogación de tipo legal opera por el solo ministerio de la ley y por el solo hecho del pago al asegurado.

Expone que los hechos que activaron la póliza de seguros fueron los siguientes: que el día 22 de septiembre del año 2019, hubo un accidente de tránsito en la Ruta B-25, perteneciente a la asegurada Ruta Del Loa Sociedad Concesionaria S.A. Esta ruta se encuentra ubicada en el sector sur de la Comuna de Sierra Gorda, entre las ciudades de Calama y Antofagasta, Región de Antofagasta. En este accidente de tránsito, murió don Carlos Manuel Adones Saravia, de 25 años de edad, quien era copiloto del vehículo Chevrolet Corsa, conducido por Bryan Rowe Fabián y al transitar a la altura del kilómetro 10.280 perdió el control del vehículo, cruzando el eje demarcado de la calzada a la otra vía, colisionando



frontalmente con un vehículo Ford Explorer que iba en sentido contrario.

Afirma que la causa del accidente se debió a la exclusiva negligencia de la demandada, de acuerdo a todos los antecedentes emitidos con ocasión del presente siniestro y, muy especialmente, del peritaje del accidente número 24-2019, emitido por Iván Stenger Larenas, Perito Judicial en hechos de tránsito y del informe de liquidación de seguros, emitido por Graham Miller.

Explica que el día 18 de septiembre de 2019, Carabineros de Chile, se percató de un hundimiento en la berma derecha en dirección al oriente de la ruta B-25, a la altura del kilómetro 10280 y, que con fecha 21 de septiembre de 2019, se le avisó a la asegurada de este hundimiento, quienes proceden inmediatamente a enviar una patrulla a revisar el sector, donde constatan la efectividad del hundimiento de la berma.

Refiere que el día 24 de septiembre de 2019, luego de comprobar que Aguas Antofagasta, empresa dueña del acueducto que generó el hundimiento por una masiva filtración, ya había reparado el daño a la matriz, se pudo reparar el hundimiento en la berma.

Explica qué en efecto, tal como consta en registros fotográficos y los reclamos realizados a la demandada, a 26,70 metros al sur de la Ruta B-25, paralelo a la vía, hay un acueducto, el cual, días antes del accidente, debido a una filtración de su estructura empezó a escurrir líquido al suelo que por gravedad se desplazó hacia el norte, disolviendo el agua, las sales que en un alto porcentaje contiene la capa de



tierra ubicada bajo el asfalto, (aproximadamente un metro de espesor). Que la saturación de la capa de tierra, sumado el peso del pavimento y al sometimiento de carga del asfalto por el tránsito vehicular, hizo colapsar la vía, bajando su nivel, lo que originó un badén que el 18 de septiembre ya tenía aproximadamente 12 centímetros.

Señala que el perito judicial en hechos de tránsito concluyó que la causa basal del accidente fue: "Debido a una filtración de agua de un acueducto próximo a la Ruta B-25, el escurrimiento de líquido por gravedad se desplaza hacia la calzada, origina la saturación del suelo bajo la vía, disolviendo las sales, lo que sumado al peso del asfalto y sometimiento de carga por el tránsito vehicular, origina que colapse la pista sur de la calzada, bajando de nivel, (badén), situación que origina la pérdida de control de su vehículo por parte del conductor (1), debido a lo cual, sobrepasa el eje de la vía colisionando frontalmente al vehículo (2)."

Manifiesta que el contrato de seguros, ya individualizado, a la época del siniestro, amparaba las materias aseguradas contra responsabilidad civil general, por un total 25.000 unidades de fomento y en virtud del siniestro detallado precedentemente, la asegurada efectuó la denuncia del siniestro a la compañía, con cargo a la póliza de marras, con la finalidad de efectuar el proceso de determinación de las pérdidas y existencia de cobertura, designándose a los liquidadores oficiales de seguros, señores Graham Miller, quienes tramitaron el siniestro utilizando el número o código de liquidación 219100958.

Expresa que en el presente caso, el daño patrimonial



sufrido por la asegurada (que fue debidamente indemnizado por la aseguradora) está representado fundamentalmente por el daño moral que debió pagar a la familia de la persona que murió en el accidente, sin perjuicio de lo anterior, los liquidadores Graham Miller, en cumplimiento de sus funciones de ajuste de pérdidas, determinaron que el monto de la pérdida asociada a este concepto - previa aplicación del deducible pactado - correspondería a la suma de \$105.000.000, suma demandada en autos.

Cita y transcribe los artículos 1437 y 2284 del Código Civil e indica que en ambos artículos hay elementos que están presentes en el caso de marras, vale decir, un hecho culpable por parte de la demandada, que generó serios y graves daños a Rutas del Loa, y por consiguiente, a su representada en calidad de subrogataria legal.

Analiza la existencia de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual en el caso de autos, para lo cual cita los artículos 1437 y 2314 del Código Civil, que disponen que para que exista responsabilidad civil y nazca la obligación de reparar, el primer elemento es que el hecho ilícito haya causado daño, concluyendo que en este caso, el daño corresponde a los perjuicios patrimoniales, debido a la falta de diligencia en la mantención de la cañería, la cual tuvo graves filtraciones, causando serios daños a la infraestructura de la ruta, todo esto producto de la negligencia de la demandada.

Expone como segundo elemento de la responsabilidad civil extracontractual, que el daño debe ser imputable a dolo o a culpa. Al efecto, cita y transcribe el artículo 44 del



Código Civil y, la definición de culpa, sosteniendo que para que se produzca el nivel de daños que se han descrito en este libelo, la demandada actuó de forma negligente, pues es de su responsabilidad el no causar daños a terceros mientras realiza su actividad económica, por lo que las graves consecuencias, deben ser de su responsabilidad, ya que es la llamada legalmente a actuar con la diligencia necesaria para evitar estos hechos en el desarrollo de su industria, concluyendo que no cabe duda sobre la imputabilidad de la demandada.

Sostiene que un tercer elemento de la responsabilidad civil extracontractual demandada es que exista relación de causalidad entre el dolo o culpa y el daño. Respecto de este elemento, cita y transcribe al profesor Enrique Barros Bourie.

Señala respecto del tercer elemento, que la *condictio sine qua non* de los daños producidos a la ruta, que trajo consigo el fatal accidente de tránsito, se debe a la falta de mantención del acueducto perteneciente a la demandada.

Finalmente, señala el último elemento de la responsabilidad civil extracontractual consiste en que el autor del daño sea capaz y, siendo la regla general la capacidad, cita y transcribe el artículo 2319 del Código Civil.

Concluye que existen en este caso todos los elementos que hacen procedente la responsabilidad de la demandada por los daños que sufrió Rutas del Loa, producto de la filtración de agua desde el acueducto.

Cita al profesor Enrique Barros Bourie, quien señala



que: "la regla de presunción de culpa por el hecho propio tiene su antecedente más general en una máxima fundada en la experiencia: el solo hecho del accidente puede ser indicio "prima facie" de la culpa de quien desarrolla la actividad (...). Explica que para que se aplique la presunción bajo este concepto resulta necesario, ante todo, que la actividad haya estado bajo el control del demandado, pues no puede presumirse la culpa, si el daño ocurre fuera de su ámbito de cuidado.

Ante la cita precedente, se cuestiona, ¿Quién debe cumplir con las mantenciones del acueducto?, ¿Quién debe reparar las filtraciones de agua?, ¿Quién es el encargado de verificar que sus instalaciones estén en perfectas condiciones sin causar daños a terceros? y por último, ¿quién es el llamado legalmente a evitar la falla respecto a todas la interrogantes anteriores y además quién es el que debe accionar en caso de que esto ocurra, para minimizar los daños?. La respuesta a todas estas preguntas a juicio de esta parte es clara, es la demandada Aguas Antofagasta S.A, en su calidad de dueña del acueducto, quien puso en grave riesgo no solo a la infraestructura de la ruta, sino que a todos los que circulaban por la vía en esos momentos. Asevera que las consecuencias de la presunción son claves: "mientras el demandado no demuestre que el accidente se debió (o pudo razonablemente deberse) a una causa distinta a su propia culpa, su negligencia puede ser presumida.

Respecto de la responsabilidad de la demandada cita, y desarrolla la doctrina del riesgo y al respecto, señala, que ésta, ya sea mediante no realizar las mantenciones o no haber arreglado oportunamente la falla en sus acueductos, elevó su



servicio a la categoría de altamente riesgoso y es responsable por los daños que irrogó en el ejercicio de su actividad económica.

Señala que según ha descrito el profesor Abeliuk, estamos frente a la llamada culpa in ommitendo, puesto que no se tomaron las precauciones que debieron adoptarse, o no se previó lo que debió preverse. Así considerado, la culpa de la demandada es evidente, teniendo en consideración que su negocio es la distribución de agua y, debieron asegurarse de mantener en buenas condiciones sus instalaciones.

Destaca que los tratadistas vinculados al área del Derecho Civil se han preocupado mucho en definir los aspectos conceptuales de los elementos de la responsabilidad civil, pero la verdad de las cosas es que los problemas vinculados a ésta son más fácticos que jurídicos. Al respecto, cita y desarrolla, la institución conocida res ipsa loquitur, del sistema anglosajón, que sostiene debe presumirse la negligencia de la demandada dado que, podría no explicarse que pasó en concreto, pero es evidente que el accidente y los daños a la asegurada de su representada, solo podrían ser consecuencia de la negligencia de la demandada.

Aclara que aun considerando que la responsabilidad es de los dependientes de la demandada, para lo cual cita artículo 2320 del Código Civil, hay que tener presente que la contraria, tiene a su cuidado a los gerentes, jefes, supervisores, choferes y personal en general; quienes cumplieron con las pautas que fija la autoridad y no realizaron las mantenciones. Sostiene que la demandada y las personas elegidas por ella para trabajar directa o



indirectamente en la mantención, reparación de las fallas o en la vigilancia del buen funcionamiento de sus acueductos, han cometido un grave descuido, imprudencia y negligencia, configurándose una absoluta falta de precaución, atención y vigilancia de parte de ésta.

Finaliza solicitando, en virtud de lo expuesto, disposiciones invocadas y en conformidad a lo establecido en los artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, tener por interpuesta demanda en juicio ordinario por responsabilidad extracontractual en contra de Aguas de Antofagasta S.A., y en definitiva declarar: a) Que se acoge la demanda interpuesta por Compañía de Seguros Generales Continental S.A. en contra de Aguas de Antofagasta S.A; b) Que la demandada es responsable de los daños y perjuicios causados a la demandante; c) Que la demandada debe pagar la suma de \$105.000.000 (ciento cinco millones pesos chilenos) o la suma que el Tribunal estime en derecho corresponde; d) Que las sumas que el Tribunal ordene pagar se reajusten en su caso, como asimismo sean incrementadas con los intereses máximos que la ley permita fijar, hasta la fecha efectiva del pago y, e) que la demandada debe pagar las costas de la causa.

A **folio 12**, con **fecha 29 de marzo de 2021**, contestando la demanda, don Marcelo Zavala Inostroza, abogado, en representación de la demandada, **Aguas Antofagasta S.A.** y, solicitó su total rechazo con costas.

Funda su contestación en los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación expone:

I.- Consideración de carácter previa.

Explica que la aducción de la que forma parte el



ducto por el cual escurrieron las aguas, es la Vieja Aducción Calama Antofagasta (VACA) la que nace en la Planta de Filtros Cerro Topater y llega hasta la Planta de Filtros Salar del Carmen, en esta ciudad. Ésta tiene una extensión aproximada de 210 kilómetros, y es parte de las principales líneas de conducción de agua del Gran Sistema Norte. Su función es transportar agua cruda desde Calama a Antofagasta.

Señala que el día sábado 21 de septiembre, cerca de las 19 horas, el Jefe del Departamento de Operaciones de Aguas de Antofagasta S.A., recibió un mensaje vía whatsapp de la Municipalidad de Sierra Gorda, el que a su vez le había sido enviado por Carabineros de Chile, dando cuenta de una filtración de la tubería de agua del costado sur oriente de la ruta B-25 kilómetro 10.260, la que estaba produciendo un reblandecimiento del terreno y estaba afectando la carretera.

El mensaje se refería a una filtración en una unión de la aducción vieja aducción Calama Antofagasta, ubicada a unos 30 metros de la carretera. Expresa que aproximadamente a las 20:00 horas de ese mismo día, tal reporte de whatsapp había sido reenviado por el Seremi del Ministerio de Obras Públicas a la Directora de Asuntos Corporativos de Aguas Antofagasta, constatando que las medidas para reparar tal evento ya se habían iniciado por parte de personal de su Gerencia de Operaciones. Indica que cerca de las 19:30 horas del sábado 21 de Septiembre, la Gerencia de Operaciones coordinó la atención inmediata de la filtración, atención que se gestionó a través del Jefe de la Unidad de Reparación de Redes, quien solicitó al área de logística las piezas necesarias para asegurar la unión que filtraba a través de un



primer apriete de elementos de sujeción de ésta (pernos). Manifiesta que la empresa asignada para ejecutar este trabajo fue Berwins, que era parte del plan de contingencias de Fiestas patrias. Sostiene que a la 1:25 am del domingo 22 de septiembre, es decir, 6 horas después del aviso de la filtración, se reportó que ésta había sido contenida, de acuerdo a lo señalado por el supervisor de la gerencia de operaciones de turno.

Aclara que la reparación fue ejecutada en dos etapas, que detalla. Explica que este tipo de reparación permite aislar la unión con filtración generando la estanqueidad absoluta de ella.

Destaca que el trabajo total, tomando en consideración el traslado del personal hasta el sitio de la faena; la ejecución de la reparación definitiva y su posterior regreso a la ciudad de Antofagasta, tomó un tiempo de 8 horas.

Precisa que la causa de la filtración se debió a la pérdida de hermeticidad parcial que sufrió la unión que conecta a 2 tubos de la aducción.

Subraya que la pendiente existente en la zona favorece el escurrimiento desde el sector sur hacia la ruta de cualquier masa de agua, ya sea proveniente de las aducciones de Aguas Antofagasta o que se genere por algún fenómeno climático, la que termina, inevitablemente, acumulándose en el sector donde se encuentra la carretera.

Menciona que respecto de las inspecciones que Aguas Antofagasta realiza a este tipo de infraestructura (aducciones), existe un plan de inspecciones y mantenciones preventivas de carácter semanal y bimensual. Respecto de la



inspección bimensual se inspecciona seis veces en el año: febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre.

Explica que para las dos aducciones que se emplazan entre Calama y Antofagasta, la Unidad de Operación de Aducciones realiza, semanalmente, actividades de inspección, consistentes en un recorrido que revisa en terreno las presiones de las estaciones reductoras de presión y control del caudal.

Expresa que la vieja aducción Calama Antofagasta (que presentó la filtración en la unión), se compone básicamente de tubos cuya longitud es de 12 metros, lo que significa que existen aproximadamente 17.500 uniones en su trazado.

Para efectos de las inspecciones programadas, la vieja aducción Calama Antofagasta, está dividida en tres sectores:

- a) Sector 1: Antofagasta hasta Sierra Gorda.
- b) Sector 2: Entre Sierra Gorda y Baquedano.
- c) Sector 3: Entre Baquedano y Calama.

Recalca que con fecha 13 de agosto de 2019, se realizó la inspección del Sector 1, según programa de inspección de aducciones, Alimentadoras y Equipos de la Unidad; con fecha 19 de agosto de 2019 se realizó la inspección del Sector 2 y 3, según programa de inspección de aducciones, Alimentadoras y Equipos de la Unidad. La Semana del 06 de septiembre de 2019, se realizó el recorrido de control completo, no detectando filtraciones en las aducciones. La semana del 13 de septiembre, personal de Aguas Antofagasta se trasladó desde la Aducción Tocopilla hasta el



sector Minera Spence, para la regulación del caudal, no detectando visualmente ninguna filtración. La semana del 20 de septiembre, personal de Aguas Antofagasta realizó un control de aducciones, no detectando filtraciones en las líneas.

Añade que el día miércoles 25 de septiembre de 2019, se realizó una nueva inspección detallada en el sector donde se generó la filtración en unión dresser, en el Kilómetro 10 de la ruta 25-B. No se encontraron filtraciones. No se detectaron hundimientos en la carretera, filtraciones, fallas en el tramo inspeccionado, tampoco pérdidas de hermeticidad en las uniones inspeccionadas.

II.- Aguas de Antofagasta S.A. no se encuentra legitimada pasivamente.

Expresa que la falta de legitimación del demandado se debe a dos razones fundamentales:

La primera se refiere a que la concesionaria Rutas El Loa es responsable del accidente del día 22 de septiembre de 2019 en que falleció don Carlos Manuel Adones Saravia, por su negligencia grave, pues es la propia demandante en su relación de los hechos al demandar, quien reconoce que los trabajos de reparación por parte de la concesionaria, solo se llevaron a cabo el día 24 de septiembre de 2019, dos días después del accidente, sin que ésta hubiera, como la lógica indica puesto alguna señalización apta para evitar dicho accidente, mientras llevaba a efecto las reparaciones pertinentes. Además, agrega que la demandante omite un hecho importante y, este es, que su representada, Aguas Antofagasta S.A, el mismo día que tomó conocimiento de la filtración de uno sus ductos, 21 de septiembre de 2019, a las seis horas



posteriores a dichos avisos había reparado dicha filtración en un 100%.

Señala que el estatuto jurídico, al cual está sometida una concesión de una obra pública, como es, la autopista el Loa, determina derechos y obligaciones para ésta y, entre los segundos de manera general están, los siguientes: *la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública denominada "CONCESIÓN VIAL RUTAS DEL LOA"*, según Decreto Supremo número 149, de fecha 27 de Diciembre de 2017, del Ministerio de Obras Públicas, que adjudicó a la empresa **"Concesión Vial Rutas del Loa"**, el Contrato de Concesión.

Al efecto, expresa, que el estatuto jurídico de la concesión estaría dado por: Decreto de adjudicación, ya individualizado en el párrafo precedente, que pasó a formar parte integrante del Contrato de Concesión, conjuntamente con las Bases de Licitación, las Circulares Aclaratorias, las Ofertas Técnica y Económica, el Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas, el Manual de Manejo de Áreas Verdes para Proyectos Concesionados, el Estudio de Impacto Ambiental, Tramo Ruta 25 Sector Carmen Alto -Calama, el Estudio de Impacto Ambiental, Tramo Nueva Circunvalación Oriente a Calama, los Antecedentes referenciales de Ingeniería, el Decreto Supremo Ministerio Obras Públicas número 900 de 1996, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con fuerza de ley Ministerio Obras Públicas número 164 de 1991, la Ley de Concesiones de Obras Públicas y sus modificaciones, y el Decreto supremo Ministerio Obras Públicas número 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones y sus modificaciones.



Con relación a este estatuto jurídico, que obliga a la concesionaria a mantener la autopista, detalla el demandado, las siguientes obligaciones:

a) Reparar o construir todas las obras necesarias de defensas fluviales; Mejoramiento y/o construcción y de los Sistemas de Saneamiento y Drenaje; Rehabilitación, mejoramiento y/o limpieza de todo el sistema de drenaje y saneamiento, todo lo anterior de acuerdo a artículos de las Bases de Licitación que cita.

b) Obligación de la Concesionaria de establecer y operar las siguientes unidades: Servicios Especiales Obligatorios, esto es, el funcionamiento y Operación del Área de Servicios Generales y Atención de Emergencias; Servicio de Asistencia en Ruta; Servicio de Atención de Usuarios, y Servicio de Operación de la Plaza de Peaje, respectivamente, todas obligaciones que forman parte del contrato de concesión, que se encuentran especificadas en las bases de licitación, que como se dijo, son parte integrante del estatuto jurídico de las concesionarias y, en este caso de la asegurada.

c) el Concesionario será siempre responsable del cumplimiento cabal, íntegro y oportuno del contrato de concesión, de la correcta ejecución de los proyectos y de las obras, de la operación de la concesión, así como del cumplimiento de los niveles de servicio y estándares técnicos establecidos en las bases de licitación para las diferentes etapas y condiciones de la concesión, durante toda su vigencia, y del cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el contrato de concesión, sin perjuicio de las funciones de dirección y control que corresponden al Ministerio de Obras Públicas.



d) el concesionario está obligado a conservar las obras en las condiciones contempladas en el contrato y en el plan de conservación de las obras y programa anual de conservación aprobados por el inspector fiscal, ya sea a través de recuperar, conservar o reforzar los elementos que se deterioren por su uso y por el transcurso del tiempo a su entero cargo, costo y responsabilidad.

e) La sociedad concesionaria recibirá la infraestructura preexistente en el estado en que se encuentre al momento de su entrega y será de su entera responsabilidad, cargo y costo, realizar las obras de mantenimiento de la infraestructura exigidas en los documentos que conforman el contrato de concesión.

Señala que la concesionaria Rutas del Loa, es responsable del accidente de marras, pues no cumplió con las obligaciones que le imponía el estatuto jurídico aplicable a las concesiones de esta especie (Ley de concesiones de obras públicas, reglamento de la misma ley, contrato de concesión, bases de licitación y otras). Agrega que además la concesionaria, no ejecutó las obras -autopista-en el lugar ni con los materiales adecuados a la obra pública objeto de la concesión.

Reitera que ninguno de los servicios y obligaciones dispuestos en el contrato, las bases y todo el estatuto jurídico aplicable, para prevenir hechos como el accidente del día 22 de septiembre de 2019, funcionó. Nadie de Rutas el Loa hizo algo, siendo evidente que era la asegurada de la actora quien tenía que velar porque tales rutas se encontraran en perfectas condiciones de funcionamiento, para que todos



quienes transitan por ellas, por los medios de transportes más variados, lo hicieran en óptimas condiciones de seguridad.

Expresa que la segunda razón por la que considera existe falta la legitimidad pasiva, se relaciona con la descripción de lo ocurrido que hizo la propia actora, pues aparece claro que en el acaecimiento del accidente del día 22 de septiembre de 2019, le cupo también un grado de responsabilidad al conductor del automóvil Chevrolet Corsa.

Explica que fue este vehículo el qué al transitar por la berma, que había sufrido un hundimiento, en una ilegal maniobra de presumible adelantamiento, a la altura del kilómetro 10.280 su chofer perdió el control, cruzando el eje demarcado de la calzada a la otra vía, colisionando frontalmente con un vehículo Ford Explorer que viajaba en sentido contrario.

Subraya que la demandante en su demanda, reconoce implícitamente, que el corresponsable del accidente, conjuntamente con la concesionaria, fue el conductor del automóvil Chevrolet Corsa, y no su representada, ya que lo hacía con infracción a diversas disposiciones de la ley de tránsito número 18.290, que cita y transcribe detalladamente al efecto, los artículos 2 número 7; 108; 120; 121; 148; 149; 170; 172 y 200 número 3.

III.- La presunta negligencia imputada a AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A., no constituye causa inmediata, directa ni eficiente del daño.

Señala que el escurrimiento de agua que se alegó al accionar, no constituye la causa inmediata, ni directa, ni eficiente del daño, pues lo que originó el perjuicio no fue el



agua que fluyó desde la matriz hasta la carretera, sino la omisión en que incurrió la concesionaria, al dejar transcurrir un lapso no menor a siete días, sin efectuar faenas de contención o señalización con el objeto de impedir que se produjeran accidentes y, el comportamiento imprudente del conductor del automóvil, pues reitera, una cuadrilla de trabajadores de la demandada, concurrió al lugar de la filtración el 21 de septiembre de 2019, el mismo día en que se tuvo conocimiento de ella y, procedió a la reparación del ducto, lo que corrobora que no fue la filtración de agua la causa del accidente, sino que la inconcurrencia de la concesionaria a reparar el hundimiento de la berma, omisión que conjuntamente con la conducción del chofer del Chevrolet Corsa ocasionaron el accidente con resultado muerte del copiloto de este vehículo.

Añade que si bien la causa inmediata y directa del accidente fue el incumplimiento de la concesionaria de la normativa que la regula, también influyó en ésta la precariedad, pobreza y falta de consistencia del material empleado en las fundaciones sobre la cual la carretera fue asentada, construcción que se ha efectuó sobre un terreno pobre, inadecuado, y abundante en sales minerales, en especial considerando el peso del pavimento y el sometimiento de carga del asfalto por el tránsito vehicular preponderantemente constituido por vehículos y maquinarias de la gran minería, cuyo tonelaje arroja un gran duda acerca de la capacidad y resistencia de la carretera para afrontar semejante carga de trabajo.

IV.-Pronunciamiento del liquidador de seguros



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PKYJXBHSSD

excluye la responsabilidad a AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A.

Cita y transcribe el artículo 12 del nuevo reglamento de los auxiliares del comercio de seguros y procedimiento de liquidación de siniestros, número 1055, de fecha 17 de agosto de 2012, que define a los liquidadores de seguros.

Señala que al demandar se alegó que la Compañía de Seguros Generales Continental S.A., cubrió el siniestro en el que se vio involucrada su asegurada, Rutas del Loa, Sociedad Concesionaria S.A., pagando la suma de \$105.000.000 por concepto de daño moral. También se dijo en el libelo que el referido siniestro fue liquidado por un liquidador de seguros, quien concluyó que era procedente su cobertura, al haber tenido su asegurado- la concesionaria- responsabilidad en el hecho investigado.

Expresa qué si el liquidador respectivo hubiese concluido que la concesionaria no era culpable del hecho, no le habría sugerido a la aseguradora que lo cubriera, aconsejando su rechazo. Indica que si algún responsable hubo en los sucesos investigados, ésta fue también en la opinión del liquidador de seguros, exclusiva y excluyentemente, la asegurada de la actora. Por lo mismo, manifiesta que debe deducirse que Aguas Antofagasta, ninguna culpa tuvo en el accidente, lo que reafirma el alegato sobre inconcurrencia de legitimación pasiva de Aguas Antofagasta SA.

Reitera qué del informe de liquidación respectivo, inevitablemente se infiere que es improcedente que ahora la compañía de seguros asuma una postura diferente a la anterior, sindicando como responsable de los hechos a Aguas Antofagasta



S.A., demandándola judicialmente para obtener el reembolso de lo que aquélla pagó, imputándole culpa, por un siniestro originado por su propia asegurada.

Solicita que a las confesiones realizadas por los abogados de la contraria, en los términos señalados, se les debe otorgar el valor probatorio de plena prueba, atendido lo dispuesto por el Artículo 1713 del Código Civil.

V.- Falta de señalamiento del acto que motivó la activación de la cobertura del siniestro.

Expresa que en la demanda se incurrió en otra omisión grave, consistente en que no se indicó que tipo de seguro se activó, ni cuál fue el acto que motivó la activación de la cobertura del siniestro, refiriéndose a si fue por un hecho propio de la asegurada o por daño a terceros, motivo por el que expresa que la demandante pagó por mera liberalidad.

Al respecto, cita y transcribe sentencia arbitral en juicio caratulado "Empresa Constructora Cyma Limitada con Compañía de Seguros Cruz del Sur S.A.".

VI.- Inexistencia de interés asegurable por parte del asegurado que hace improcedente la indemnización.

Expone que la asegurada carece de interés asegurable, justamente porque no evitó el riesgo que a la sazón la afectó, por lo cual la actora no debió resarcir los supuestos detrimentos que sufrió, ni menos aún demandar a su parte por el reembolso generado por un daño que jamás ocasionó, por lo que su libelo deberá ser rechazado en todas sus partes.

Al respecto, cita y transcribe los artículos 513, 518, 520 y 546 del Código de Comercio, que se refieren al



concepto de interés asegurable; a que la póliza de seguros deberá expresar a lo menos interés asegurable; qué si no existe interés asegurable al momento del siniestro, el contrato de seguro se termina y, finalmente artículo 546, que dispone:

"....Si carece de interés asegurable a la época de sobrevenir un siniestro, el asegurado no podrá reclamar la indemnización; pero en todo caso tendrá el derecho que le otorga el inciso segundo del artículo 520". Cita y transcribe la sentencia arbitral pronunciada en el juicio "gitano chile comercial e industrial limitada - con - Allianz compañía de seguros S.A., árbitro sr. Rafael Gómez Balmaceda; 28/08/1995, pág. 947.

Indica que de las confesiones hechas por la actora en la demanda, constituyen una verdad incontrarrestable de que la asegurada no tuvo ni el más mínimo cuidado, ni diligencia en la conservación de la carretera cuya concesión le fuera otorgada, lo que exonera a su representada del reembolso de cualquier pago por un eventual siniestro que lo haya afectado, toda vez que carecía de interés respecto del bien asegurado, dado que de lo contrario, el mismo día en que se le denunció que la berma había experimentado un hundimiento, la habría reparado, no esperando una semana para hacerlo, diligencia que a su vez habría impedido que se registrara el resultado letal que lamentablemente al final se causó.

VII.- Incumplimiento por parte del asegurado de importantes obligaciones legales que exoneraban a la compañía de seguros de su obligación de indemnizar.

Señala que es obligación del asegurado esforzarse al máximo para limitar y circunscribir las consecuencias del



siniestro, evitando la propagación de los daños hasta donde sea posible, imposición que no fue cumplida por la asegurada, por lo que el siniestro que la afectó no tenía cobertura, debiendo haber sido rechazado. Al efecto sostiene que transgredió el artículo 526 del Código de Comercio, que dispone: "El asegurado, o contratante en su caso, deberá informar al asegurador los hechos o circunstancias que agraven sustancialmente el riesgo declarado, y sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato, dentro de los cinco días siguientes de haberlos conocido, siempre que por su naturaleza, no hubieren podido ser conocidos de otra forma por el asegurador". Se presume que el asegurado conoce las agravaciones de riesgo que provienen de hechos ocurridos con su directa participación...". Reitera que tal obligación no fue cumplida por la asegurada, ya que no reparó el badén en la berma de la carretera una vez informada y efectuada por su representada las tareas de reparación de la avería del ducto, con lo que vulneró su obligación de información a la contraria de las circunstancias que incidían directamente en la agravación y extensión del riesgo existente, lo que terminó con el accidente referido en la demanda, constituyendo, derechamente, un grado de desidia y negligencia inexcusables, que lo debió privar de todo resarcimiento a la concesionaria asegurada.

Señala y cita, también, que la concesionaria asegurada incumplió, el Artículo 524 del Código de Comercio, que dispone: 4° "A emplear todo el cuidado y celo de un diligente padre de familia para prevenir el siniestro". Agrega que conforme al Artículo 44 del Código Civil, el contrayente



está sujeto a observar en la prevención del siniestro la diligencia o cuidado medianos y responde, en consecuencia, de la culpa leve y que el número 6 Artículo 524 del Código de Comercio, dispone: "A tomar todas las providencias necesarias para salvar o recobrar la cosa asegurada...".

VIII.- El siniestro que afectó a la concesionaria no era Indemnizable.

Señala que no correspondía el pago de la indemnización por parte de la **Compañía de Seguros Generales Continental S.A.**, sino que muy por el contrario, al hacerlo se ha vulnerado flagrantemente la letra y el espíritu de toda la legislación que nos rige en materia de tránsito y, el pago debe de ser considerado una mera liberalidad, cuya cancelación no da lugar a la subrogación legal a la cual se refiere el artículo 534 Código de Comercio, lo que conlleva que la demanda de autos debe ser rechazada en todas sus partes.

Cita el artículo 535 del Código de Comercio, que dispone: "El asegurador no está obligado a indemnizar el siniestro que se origine por dolo o culpa grave del asegurado o del tomador en su caso, salvo pacto en contrario para los casos de culpa grave" y, expresa que ya se ha indicado en los párrafos precedentes como la concesionaria fue negligente en cumplir sus obligaciones legales y contractuales, así como el chofer del Corsa Chevrolet condujo vulnerando la ley de tránsito.

IX.- Confusión en que se incurrió al demandar.

Expresa que la demanda no es clara en cuanto a los daños que se solicita indemnizar, pues en parte de la demanda se señala que la demandante indemnizó el daño propio, el



perjuicio que sufrió la carretera, mientras que en el mismo escrito indica que al asegurado se le pagó el perjuicio del supuesto daño moral irrogado a terceros.

Señala que la doctrina y la jurisprudencia en materia de seguros, coinciden en que éste es un contrato de mera indemnización y jamás puede constituir para el asegurado una fuente de ganancia, por lo que si la contingencia que afectó a su infraestructura no constituyó un riesgo cubierto, mal pudo haber sido resarcida, al efecto cita y transcribe el artículo 550 del Código de Comercio.

X.- Inexistencia de la necesaria relación de causa a efecto.

Opone a la demanda por responsabilidad extracontractual, la excepción de no existir relación de causalidad entre un inexistente incumplimiento culpable de obligaciones de Aguas Antofagasta S.A. y los daños demandados.

Afirma qué desde el punto de vista natural de la relación causal, en la demanda de autos no se ha señalado ni explicado cómo se acredita este nexo, pues en los hechos esta relación no existe. Aguas Antofagasta S.A., cumplió con todas sus obligaciones, y de ninguna actuación de ella pueden seguirse los daños demandados.

Señala qué desde punto de vista normativo, **Aguas Antofagasta S.A.**, ha cumplido con todas sus obligaciones y su actuar ha sido respetando plenamente la normativa de seguridad vigente, y la conducta de sus trabajadores y dependientes lo ha sido en todo con plena observancia de las leyes y reglamentos.

XI.- En subsidio, alega concurrencia de una causa



posterior al hecho.

Indica que en el caso de autos se configura el principio de la concurrencia de causas posteriores al hecho, lo que trae como consecuencia que no exista vínculo causal entre la filtración del agua y el supuesto perjuicio, por lo que no es resarcible.

Explica que a la filtración de agua desde la tubería de propiedad de su representada concurrieron distintos hechos, unos de cargo del incumplimiento de las obligaciones de la concesionaria; otras, de responsabilidad del conductor del automóvil Chevrolet Corsa, todas las cuales se explicitaron debidamente a lo largo de esta presentación. En cuanto a la importancia de esta concurrencia, se remite a lo que sobre el tema sostiene el Profesor René Abeliuk, quien bajo el epígrafe Intervención de una Causa Posterior al Hecho, señala: *"Hay más o menos acuerdo para concluir que si el daño se debe a una causa posterior al hecho ilícito, falta la relación de causalidad, el daño es indirecto y no indemnizable"*.

XII.- En subsidio, alega caso fortuito o fuerza mayor como eximente de responsabilidad.

Cita y transcribe el artículo 45 del Código Civil, que define caso fortuito. Al efecto, explica que concurre en el caso sub judice esta eximente de responsabilidad, desde el momento en que lo normal al experimentar la tubería un desajuste en alguna de sus uniones es que el agua que escurra y se deposite en terreno llano y regular, formando un pozo cuyo contenido hubiere sido lentamente absorbido por las arenas del desierto o por la natural evaporación debido a las altas temperaturas que durante el día éste registra. Señala



que por una razón de fuerza mayor, no ha sucedido de ese modo, pues a su entender erróneamente la carretera en el sector afectado fue emplazada en al fondo de un terreno escarpado, hacia el cual en razón de la gravedad, las aguas -que normalmente debieran haber quedado depositadas en el contorno de la parte de la tubería en la cual la filtración se produjo- escurrieron hacia abajo y alcanzaron la carretera reblandeciendo su terreno circundante.

Sostiene que fue la ubicación de la carretera en un sector escarpado y la fuerza de gravedad debido al plano inclinado lo que condujo las aguas hacia la carretera, como una circunstancia constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor que propició el escurrimiento desde el sector sur hacia la ruta, suerte que por lo demás habría sido similar a la que cualquier masa de agua, ya sea proveniente de las aducciones de Aguas Antofagasta o que se genere por algún fenómeno climático. Cita y transcribe al efecto sentencia de la Corte Suprema, que exoneró de responsabilidad a una empresa eléctrica por caso fortuito o fuerza mayor. (Corte Suprema, 9 de Septiembre 1927. G. 1992, R.t 89 sección 5° página 254).

XIII.- Alega ausencia de culpa por parte de Aguas de Antofagasta S.A.

Señala que su parte no tuvo ninguna responsabilidad en el resultado letal que se relata en la demanda. Su alegato de absoluta inocencia emana de la manera en cómo se generaron los hechos de autos, como ya se dijo y se acreditará, en lo que concierne a la filtración en la aducción, ésta no habría tenido ninguna trascendencia si la concesionaria hubiere cumplido con sus obligaciones contractuales derivada de su



estatuto jurídico, como ya se explicó en esta contestación.

Agrega que concurrió también a la consumación del fatal desenlace, la conducta temeraria asumida por el conductor del automóvil Chevrolet Corsa, ya también expresada. Indica que Aguas de Antofagasta S.A., se condujo en estos hechos de una manera impecable, ejemplar e irreprochable y es así como, inmediatamente de recibido por el Jefe del Departamento de Operaciones el referente a la filtración de la tubería de agua del costado sur oriente en la ruta B-25 kilómetro 10.260, lo que ocurrió cerca de las 19 horas del día sábado 21 de Septiembre, se adoptó las medidas para reparar tal evento por parte de su personal, logrando que 6 horas después del aviso de la filtración, su contención.

Indica que además, en demostración del profesionalismo y responsabilidad con que su representada asumió su misión, estableció un plan de inspecciones y mantenciones preventivas para este tipo de infraestructura, de carácter semanal y bimensual, como ya se dijo en esta contestación.

XIV.- En subsidio, alega el hecho de la víctima, Compañía de Seguros Generales Continental S.A., como eximente de responsabilidad.

Alega la eximente de responsabilidad civil por el hecho de la víctima- la aseguradora demandante-, la que se materializó el apresurado pago que ésta hizo de la referida suma, \$105.000.000, lo que la llevó a cancelar un siniestro a un asegurado- la autopista- que no sufrió perjuicio alguno que lo hiciera resarcible, y, además, porque -de acuerdo a todo lo anteriormente dicho- no se encontraba obligado a indemnizar.



XV.- Consideraciones de derecho argumentadas en la demanda para atribuirle responsabilidad a la accionada y que no les son aplicables a ella, sino que a la concesionaria.

Señala que no existe ninguna presunción que pueda operar en contra de su parte, como quedó explicado, la responsable de los hechos que causaron el daño fue la concesionaria y el conductor del móvil.

En su libelo la contraria señala que por el tipo de actividad que desarrolla su parte, habría consenso en la doctrina que su responsabilidad en los hechos se habría objetivado, quedando, incurso en la teoría del riesgo, atribuyendo el daño a todo aquél que introduce en la sociedad un elemento virtual de producirlo y que se favoreciera con la actividad que desarrolla.

También expone la demandante que su representada tendría que responder por haber elegido mal al personal encargado de mantener sus cañerías (culpa in eligendo) o por no haberlo vigilado adecuadamente (culpa in vigilando) e incluso por no haber tomado las precauciones para evitar el daño (culpa in ommitendo). Como si todo lo anterior no bastare, afirma que también debe responder por el hecho de quienes estuviesen a su cuidado, en el marco de la responsabilidad civil extracontractual compleja o por el hecho ajeno.

Sin embargo, expresa, de acuerdo a todo a lo que hasta ahora hemos razonado y explicado a lo largo de esta presentación, fue el asegurado de la contraria y no Aguas de Antofagasta S.A., la responsable de los hechos que han dado origen al presente juicio.



Expresa qué en esta misma línea argumentativa, la contraria, señaló en su demanda lo siguiente: "Para que se aplique la presunción bajo este concepto resulta necesario, ante todo, que la cosa o la actividad hayan estado bajo el control del demandado, pues no puede presumirse la culpa si el daño ocurre fuera de su ámbito de cuidado". Al respecto, reitera que su mandante no sería responsable de perjuicio alguno, ya que la aducción por la que escurrió el agua que, según se dice dañó la carretera, hecho que, consecuentemente, habría ocasionado el accidente, se encuentra en el desierto, es decir, en un despoblado, formando parte de un sofisticado y complejo entramado de redes de ductos y ubicada a cientos de kilómetros de distancia de su sede, es decir, fuera de su esfera de protección, por lo que tal presunción de responsabilidad notoriamente no le es aplicable.

Agrega que en este mismo contexto, fue la asegurada y no su parte la que ha quedado incurso en la teoría de los riesgos que se le intenta imputar, ya que aquélla explotando una actividad riesgosa, como la constituye la concesión de caminos y carreteras de uso público y obteniendo pingues ganancias con tal giro, y teniendo a su personal dentro de lo que denomina su "ámbito de protección", ninguna medida adoptó para reparar el hundimiento del terreno, con lo cual se habría evitado el riesgo y el posterior perjuicio. Sostiene que no cabe ninguna duda de que quien debe responder por tan negligente actitud, ha sido la asegurada de la contraria y en modo alguno su conferente.

XVI.- El asegurado no sufrió daño que lo



constituyera en titular de indemnización alguna, lo que hacía improcedente la subrogación legal.

Señala que la doctrina ha definido el vocablo perjuicio como todo detrimento, daño, menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona, bienes, libertad, honor, crédito, afectos, creencias. El daño supone la destrucción o disminución de las ventajas o beneficios patrimoniales o extra patrimoniales de que goza un individuo.

Indica que a partir de los hechos relatados en la demanda, se podría inferir lo siguiente: a) Que la carretera concesionada al asegurado, habría experimentado algún daño; b) Que de resultas de los mismos, terceras personas habrían resultado perjudicadas.

Alega que en el primer caso la demandante debió resarcir a su asegurado el daño que le habrían irrogado los hechos de marras a la carretera, lo que más tarde la habilitaría, en virtud de la subrogación legal para dirigirse, en contra del tercero culpable, con el objeto de recuperar el dinero que le pagó por dicho detrimento. Aclara que el libelo jamás especificó el perjuicio sufrido por la asegurada, ni la cuantía de los mismos, por lo que no operó la subrogación legal en favor de la demandante ni menos a través de ella podría demandarse a su conferente el pago de una muy ingente suma de dinero por detrimentos patrimoniales que la concesionaria hubiere experimentado.

Aclara que la Compañía de Seguros Generales Continental S.A., pretende demandar a su parte por la vía de la subrogación, la solución de daños que no tienen ninguna relación con el contrato de seguro que suscribió con su



asegurado, que no los abonó a éste y que por lo tanto no han podido formar parte de este juicio, siendo de consiguiente su cobro inoponible a su representada. Finaliza señalando, que lo anterior se refuerza con lo afirmado por la contraria en su demanda, al señalar que el perjuicio material sufrido por la concesionaria se originó al pagarle un aparente daño moral a los parientes del fallecido.

XVII.- Impugna el quantum del monto demandado en el libelo.

Objeta, por excesiva, la regulación en \$ 105.000.000, del daño moral indemnizado por la Compañía de Seguros Generales Continental S.A en virtud de un contrato de seguro entre asegurado y aseguradora. Agrega que la cifra no fue pagada al asegurado, sino que a un tercero ajeno a la referida convención, no existe ningún indicio que permita determinar cómo la contraria arribó a dicha cifra, como activó la póliza ni cuándo se habría realizado tal pago.

Indica que llama la atención el ataque de generosidad con que actuó la demandante, cuando por la simple denuncia que le efectuó su asegurado pagó \$105.0000.000, sin que existiera alguna acción interpuesta por los presuntos afectados que motivara a un órgano jurisdiccional a condenarla al pago de tal guarismo.

Explica que los liquidadores de seguros, son auxiliares en el comercio de seguros que tienen conocimiento técnicos en materia de daños materiales que tenga la especie asegurada, la que puede ser de la más variada índole. Así, estos arriban a diversas conclusiones, por ejemplo, si el siniestro constituye o no un evento susceptible de cobertura



y, en el caso que sí lo sea, determinan el monto a indemnizar.

Agrega que lo que habría sido resarcido con el ingente monto demandado, habría sido el daño moral irrogado a los parientes del interfecto, (aunque en otra parte se atribuye el perjuicio al daño irrogado a la carretera), suma que habría sido liquidada por una empresa del ramo. Explica que a juicio de la defensa, y mientras no se demuestre lo contrario, éstos carecen del conocimiento técnico como para liquidar, cuantificar y evaluar tal tipo de detrimento, el que afecta a la esfera interna, psíquica y espiritual de la persona que lo experimenta, lo que queda reservado, para que sea pesquisado por un psicólogo o por un médico especialista, más en caso alguno por un liquidador de seguros.

XVIII.- Invoca la doctrina del acto propio.

Señala que por aplicación de la teoría de los actos propios, resulta inadmisibile la conducta de la actora, por resultar contradictoria con sus comportamientos observados anteriormente por ella misma, en los términos que se requiere para configurar esta doctrina, por lo que la demanda que ha deducido en contra de su representada tiene que ser rechazada.

Expresa en que consiste la doctrina de los actos propios y, señala asimismo que es manifestación de la doctrina de la buena fe y cuáles son sus requisitos.

Indica que la doctrina ha señalado la declaración de inadmisibilidad de la pretensión contradictoria, reclamada la infracción y señalando que hay incompatibilidad entre la conducta anterior y la posterior del demandante.

XIX.- Alega infracción al principio de la buena fe.

Concepto consubstancial al seguro.



Cita y transcribe el principio jurídico de la buena fe consagrado en el Artículo 706 y 707 del Código Civil. Indica que esta forma de razonar colisiona con el adoptado por la actora al demandar a su representada el pago de una ingente suma de dinero por una supuesta responsabilidad que le habría correspondido en el referido siniestro, no obstante que el liquidador respectivo concluyó que había sido el asegurado el exclusivo y excluyente culpable del mismo.

Señala que para juzgar estas materias la conducta de los intervinientes, se debe tener presente lo que prescribe el artículo 1546 del Código Civil, que transcribe. Agrega, que en materia de seguros se considera que este es un contrato de máxima buena fe, principio que si bien no se encuentra escrito en ninguna norma legal vigente en nuestro país, si es materia de especial consideración tanto en la doctrina nacional como internacional. La buena fe impide que se oculte o se retenga información, no cabe dudas que contradice el señalado principio, el aprovechamiento de la situación dominante en que incurre el asegurador que paga, para después subrogándose, repetir en contra de un tercero. Al efecto cita y transcribe al Profesor Ramón Domínguez quien expresa que: "por razones de moral, el derecho no puede dar protección jurídica integral a aquel que se ha puesto por su propia actividad, dolosa o culpable o ilícita en términos más generales, en situación de ser perjudicado por esa misma actividad". (Ramón Domínguez Águila, "Teoría General del Negocio Jurídico", Editorial Jurídica de Chile, pág. 226.)

XX.- En subsidio, alega exposición imprudente al daño.



Señala que con el mérito de todos los argumentos que desarrollados en esta presentación, les asiste la convicción que la demanda de autos deberá ser rechazada en todas sus partes, sin embargo, para el caso improbable que se estimare lo contrario, en subsidio, vengo en optar por la aplicación obligatoria al caso sub judice del artículo del Artículo 2330 del Código Civil, norma que señala que: "la apreciación del daño moral está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente".

Expone que por las múltiples razones que ha explicado en esta presentación, a su juicio el siniestro que afectó a la asegurada carecía de cobertura y que la demandante se expuso imprudentemente al daño que alegó experimentar, dado que de todas maneras indemnizó el evento, por lo que la reducción, en cuanto a la fijación de su monto, debe ser acogida por el tribunal, máxime si en los términos imperativos en que dicha norma se encuentra redactada, ella es obligatoria.

XXI.- Niega y controvierte la legitimación activa de la actora.

Cita y transcribe el inciso 1° del Artículo 534 del Código de Comercio y explica que conjuntamente con la interposición del libelo, debe acreditarse el pago para que opere la subrogación, lo que no consta en autos, por lo que éste debe ser desestimado, ya que se trata de un requisito habilitante para el ejercicio de la acción.

A folio 16, con fecha **08 de abril de 2021**, la parte demandante replica, señalando que ratifica todos los hechos descritos y fundamentos de derecho expuestos en el libelo.



Indica que la demandada a lo largo de su escrito reconoció los siguientes hechos:

a. Reconoce que existió una filtración de agua desde la Vieja Aducción Calama Antofagasta.

b. Reconoce que el día 21 de septiembre Aguas Antofagasta fue avisado de una filtración de la tubería de agua del costado sur de la ruta B-25 kilómetro 10.260, la que estaba produciendo reblandecimiento del terreno que estaba afectando la carretera.

c. Reconoce que la filtración se debió a una pérdida de hermeticidad de la unión de 2 tubos de la aducción, desconociendo la causa de esta falta de hermeticidad.

Hace presente que son hechos no discutidos que debido a una filtración de agua, culpa de la demandada, se produjo un hundimiento en la carretera que fue la causa directa de un accidente de tránsito que produjo la muerte de una persona.

Explica que debido a que el accidente sucedió en una ruta concesionada, que contaba con seguro, este operó y pagó una indemnización a la familia del fallecido. Y es la compañía de seguro la legitimada para solicitar el reintegro de lo pagado al real causante del daño, este es Aguas Antofagasta, lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el artículo 534 del Código de Comercio.

Expone que respecto la falta de legitimación pasiva alegados por la demandada basada en 2 puntos, que su parte no ha negado que la demandada eventualmente reparó la tubería que sufrió una filtración. Lo que esta parte señala es que esa filtración produjo daños a la concesionaria por haber tenido



que pagar una indemnización a los familiares de una persona que falleció producto de la negligencia de la demandada.

Señala que la demandada debió no solo reparar la filtración sino los daños que esta filtración produjo, los cuales en este caso corresponden a la indemnización que tuvo que pagar su representada, al efecto cita y transcribe los artículos 1437, 2314 y 2329 del Código Civil.

Expone que resultan improcedentes las alegaciones de incumplimiento contractual por parte de la concesionaria, ya que no se relacionan con los hechos de este juicio.

Agrega que la demandada no es parte del aludido contrato de seguros, por lo que malamente sería la contraria quien podría alegar un incumplimiento contractual, los que niega de plano, pues la concesionaria dio estricto cumplimiento a todas las obligaciones de construcción, mantenimiento y seguridad de la ruta impuestas por el contrato.

También señala que no estaría legitimado pasivamente para ser demandado en este juicio pretendiendo culpar a los ocupantes del vehículo del accidente de tránsito. Su relato se basa en supuestos que deberán ser probados en juicio.

Qué con relación a la causa inmediata, directa y eficiente del daño, la demandada señala que no se han aportado pruebas destinadas a acreditar que el badén que se produjo por la filtración de agua fue culpa de Aguas Antofagasta y, fue la causa del accidente del tránsito.

Explica qué con relación al pronunciamiento del liquidador de seguros, efectivamente el liquidador de seguros es la figura autorizada legalmente para pronunciarse acerca de



la procedencia o no de la cobertura de una póliza de seguros, de esta manera, el ajustador, realiza una labor encomendada por ley, la que se sujeta a normas y procedimientos.

Manifiesta que el liquidador de seguro, en cumplimiento de la ley, está obligado a señalar si procede o no la cobertura, pero en ningún caso a establecer responsabilidades y, este es el motivo por el cual el liquidador no señala un responsable, esa no es su labor encomendada por ley, lo que no impide que dé una explicación circunstanciada de los hechos y sus consecuencias y que en el caso de autos, haya señalado explícitamente que el accidente vehicular se produjo por el efecto del agua en la ruta, que no se nombre expresamente a Aguas Antofagasta, no implica que no sean los responsables del agua que escurrió a la calzada.

Agrega que en el caso de autos, su representada indemnizó a la familia de la persona fallecida, porque el accidente de tránsito se produjo por un badén en la carretera. Esto implica un menoscabo patrimonial para la concesionaria que tiene un responsable: Aguas Antofagasta, ya que por su negligencia se produjo el badén en la vía.

Indica con relación acerca de la falta de señalamiento del acto que motivó la activación de la cobertura del siniestro, que la regulación en materia de seguros no establece como requisito de aplicación de una póliza el que haya una condena judicial, menos aún podría requerir que hubiera una demanda iniciada.

Señala que en la oportunidad procesal correspondiente serán acompañados todos los antecedentes necesarios para probar la procedencia del pago del siniestro.



Rechaza las alegaciones consistentes en la supuesta inexistencia del interés asegurable que hace improcedente el pago de la indemnización; del supuesto incumplimiento por parte del asegurado de importantes obligaciones legales y, supuesto pago indebido por parte de la compañía de seguro.

Manifiesta que la demandada señala que su representada habría pagado la indemnización por una mera liberalidad; cuando en la práctica existe un expreso mandato legal, y se constituye una de las obligaciones de las aseguradoras, según lo dispuesto en el artículo 529 del Código de Comercio, que cita y transcribe. Agrega que es el liquidador de seguros, quien como ya señaló, es un tercero imparcial quien analiza la procedencia y cumplimiento de todos los requisitos para que opere o no el seguro. Agrega que el demandado no se encuentra legitimado para cuestionar a este ministro de fe, que a través de su informe de liquidación realiza un completo y acabado análisis de la procedencia del pago realizado en virtud del seguro.

Reitera que el asegurado cumplió diligentemente con sus obligaciones y el mismo día en que la concesionaria tomó conocimiento del hundimiento de la berma, es decir el 21 de septiembre de 2019, envió una patrulla a revisar el sector, la cual constató la efectividad del hundimiento a la berma, y procedió a colocar más conos en el sector, para dar aviso a los automóviles que circulaban por la zona. Asimismo se generó un plan de contingencia expedito, procediendo a cambiar toda la carpeta asfáltica del lado derecho, por un tramo de más de 8 metros lineales, para poder reparar la zona más afectada por el hundimiento. Dichos trabajos se realizaron el día 24 de



septiembre de 2019, luego de comprobar que Aguas Antofagasta, empresa responsable del hundimiento por una masiva filtración, ya había reparado el daño a la matriz, lo que era fundamental para así evitar que los arreglos se vean afectados nuevamente por la filtración.

Explica que en el caso de autos la indemnización no fue pagada a un tercero cualquiera, sino que se indemnizó a quien correspondía en virtud de lo pactado en la póliza; por lo que a menos que la contraria insista en que Continental deba actuar en contra de la ley rechazando los siniestros sin una causa aparente, estas alegaciones son del todo inentendibles y carecen de todo sustento fáctico y jurídico.

Sostiene que respecto de la supuesta confusión al demandar y la supuesta inexistencia de daño de la concesionaria, es la contraparte quien tiene una confusión de conceptos. El daño se define como el detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia causada a otro en su patrimonio o en su persona y en la presente acción se demanda el daño propio del asegurado, compuesto por el menoscabo en su patrimonio debido a una indemnización que tuvo que pagar.

Indica respecto de la supuesta inexistencia de relación causal que expone el demandado, entre la filtración de agua y la producción del daño, de no haber existido esta filtración de agua no se hubiese producido un badén en la ruta y por consiguiente no se hubiese producido el fatal accidente de tránsito.

Niega la supuesta concurrencia de una causa posterior al hecho, pues no existen causas diferentes a la negligencia de la demandada que fueran la causa del daño y



será Aguas Antofagasta quien deberá probar sus alegaciones.

Señala que respecto del supuesto caso fortuito o fuerza mayor y la ausencia de culpa por parte de Aguas Antofagasta S.A, será de cargo de la demandada demostrar todos y cada uno de estas alegaciones.

Con relación al hecho de la víctima alegado por la demandada, consistente en el hecho de Continental por haber pagado la indemnización apresuradamente, según los parámetros de la contraria, reitera que el pago se realizó en el contexto de un contrato de seguros y ante la activación de la póliza, el siniestro se deriva a un tercero: el liquidador de seguros, quien determina si procede o no realizar un pago y el quantum del mismo.

Expresa que la demandada propone que la teoría del riesgo no aplicaría a ellos. Al respecto, sostiene que en este caso la demandada, en su calidad de dueña de la tubería, debió extremar las medidas de seguridad necesarias para evitar perjuicios a terceros y es responsable por los daños que irroque en el ejercicio de su actividad económica.

En cuanto a los montos demandados, indica que en la etapa procesal correspondiente acompañará toda la prueba tendiente a demostrar los montos y daños demandados.

A **folio 18**, con fecha **14 de abril de 2021**, la demandada evacua la réplica, exponiendo:

Que en modo alguno puede considerarse como un reconocimiento de responsabilidad de su parte, lo señalado por la demandante, sino que fue la relación de los hechos con el objeto de explicar la forma en que éstos habían ocurrido.

Insiste en que ningún reconocimiento de



responsabilidad ha habido de su parte, sino que por el contrario, considera que por todas las razones expuestas en la contestación, la única culpable del fallecimiento del señor Adones Saravia fue la asegurada.

Reitera que la lógica indica que si la concesionaria se encontraba asegurada y si el liquidador respectivo sugirió que fuera cubierto por la póliza, es porque aquella fue la culpable del mismo.

Y expresa qué si la demandante sufragó la exorbitante indemnización, sin que fuese considerada culpable la asegurada, ello constituyó una mera liberalidad, que tendrá que soportar en su patrimonio, pero que no puede pretender cobrarle a su conferente.

Señala que tanto el liquidador de seguro, como esta parte arribaron a la misma conclusión, que la asegurada fue responsable del accidente, lo que no puede ser una coincidencia, sino que el corolario lógico de la forma en que realmente ocurrieron los acontecimientos.

Indica que negar el incumplimiento contractual de la asegurada revela la total indiferencia de la demandante frente a las obligaciones que contrajo la concesionaria con el Fisco de Chile, en virtud del contrato de concesión respectivo.

Refiere que no es necesario ser parte de un contrato para que alguien pueda concluir que una de las partes lo incumplió, corolario al que justamente arribó su parte.

Expone que reconocer la filtración de agua por parte de su representada, no implica reconocimiento de responsabilidad, es más, esta parte alegó total inocencia en los mismos, argumentando, que la única responsable fue la



asegurada.

Agrega que consta del mérito del proceso, que el hundimiento se produjo en la berma y, que el vehículo circulaba por dicha prohibida zona, lo que vulnera la ley del ramo como se indicó en la contestación.

Reitera la necesidad de acompañar a la demanda instrumentos habilitantes de la acción para efectos de la subrogación legal.

Expresa que constituye una confusión respecto de la forma en cómo operan las compañías de seguros, ya que éstas jamás indemnizan a terceros, si es que sus asegurados no son los responsables del siniestro y, ello se dilucida, mediante el correspondiente informe de liquidación, que en la especie concluyó que la concesionaria era la única culpable del evento, por eso que se sugirió su cobertura, lo que coincide con su posición.

Sostiene que ninguna compañía de seguros cubre un evento sin que previamente se verifique un acto que active la póliza, comúnmente, denuncia, la querella o demanda civil.

Manifiesta que no es un capricho de esta parte, señalar que sin interés asegurable no hay seguro ni indemnización, sino que el Código de Comercio así lo establece.

Señala que enviar una patrulla para corroborar el hundimiento de la berma e instalar conos en dicho lugar, de acuerdo a la teoría de los riesgos planteada por el actor, al explotar la asegurada una actividad que, indudablemente, genera riesgos y que más encima de ella obtiene grandes ingresos, no debió haber escatimado en medidas para evitar



accidentes. Respecto al cambio de la carpeta asfáltica de un tramo de 8 metros lineales, expresa que es un antecedente que no se indicó en la demanda y que pone en tela de juicio, ya que sí es que así hubiese sido, ningún accidente se habría producido.

Indica que la demandante no comprendió la parte de la contestación referida al daño propio, pues de ser esta clase de daño, habría estado configurado por el perjuicio causado en la infraestructura de la carretera, el cual como ella misma señaló, no fue demandado en autos, pues lo que pagó la demandante fueron los detrimentos causados por la responsabilidad civil del asegurado y que nada tiene que ver con su daño propio.

Aclara que si alguna causa directa hubo del siniestro, ésta consistió en que la concesionaria no tomó ninguna medida seria, ni idónea para evitar el accidente, sino que sólo se limitó a enviar una patrulla y a poner algunos conos en la berma en la que se produjo el badén. Por otra parte, expresa, si es que el vehículo no hubiese sido conducido por la berma, tampoco se habría ocasionado el incidente, por lo que constituye un muy grave error sostener que la filtración de agua fue la causa directa del mismo.

A folio 28, con fecha **04 de mayo de 2021**, consta certificación de que la conciliación no prosperó.

A folio 30, con fecha **13 de mayo de 2021**, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos.

A folio 89, con fecha **16 de mayo de 2022**, se citó a las partes a oír sentencia.

A folio 90, con fecha **29 de julio de 2022**, se



decretó medida para mejor resolver. Cumplida ésta, se trajeron los autos para fallo con fecha **23 de agosto de 2022.-**

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

En cuanto a la objeción de los documentos:

PRIMERO: Que a folio 47, la demandante objetó tres documentos acompañados por la demandada: 1. Reporte de inspecciones de vieja aducción Calama Antofagasta; 2. Inspección de 25 de septiembre del año 2019, emitido por Aguas de Antofagasta S.A y 3. Inspección áreas y equipos operaciones críticos, relativa a inspección del 13 y 19 de Agosto del 2019, emitido por Aguas de Antofagasta S.A. Funda su objeción en su falsedad y falta de integridad, pues se tratan de documentos privados, emanados de la contraria, del que no hay ninguna constancia en el proceso de su autenticidad.

Agrega que dichos documentos son fácilmente manipulables, tanto en el contenido, como en la supuesta fecha que contienen, por lo que no existe certeza alguna de la veracidad de dichos documentos. Asimismo, señala que estos documentos para tener validez deben ser reconocidos por quienes aparecen como firmantes, cuestión que no ha sucedido en autos.

Que, la parte demandada, evacuando el traslado con fecha 7 de diciembre de 2021, indicó que no existe ninguna razón para afirmar que tal documento no es íntegro, al no apreciarse ni concluirse de su tenor, en modo alguno sea incompleto, tanto material como ideológicamente, sino que por el contrario, éste fue acompañado íntegramente.

Agrega que tampoco existe constancia que los documentos sean falsos, porque haya emanado de su parte, no



puede presumirse su falsedad.

SEGUNDO: Que, un determinado documento es falso cuando no es auténtico, vale decir, cuando no ha sido realmente otorgado y autorizado por las personas y de la manera que en tales instrumentos se expresa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 del Código Civil. Si bien la demandante tachó de falsos y de faltos de integridad los documentos referidos en el motivo precedente, su objeción se fundamenta en que emanan de terceros ajenos al juicio, lo que no implica necesariamente la falsedad de éstos, de manera que la sola apreciación de una parte, sin que se encuentre acreditado por ésta la falsedad o la falta de integridad que invoca, no es suficiente para acoger la objeción, de manera que solo cabe desestimarla, sin perjuicio del valor probatorio que en definitiva se le otorgue a dichos documentos.

En cuanto a la tacha de los testigos:

TERCERO: Que, a folio 55, con fecha 17 de diciembre de 2021, la parte demandada tachó al testigo **Jorge Paredes Ortiz**, por la causal establecida en el artículo 358 número 6 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que tanto el testigo como la empresa para la que trabaja tienen interés económico directo en el juicio, pues éste ha reconocido en términos expresos, formales y explícitos que la sociedad para la que trabaja recibió honorarios por parte de la demandante, como consecuencia de la liquidación del siniestro que ha dado origen a este proceso.

La parte demandante, a folio 55, viene en evacuar el traslado conferido solicitando su rechazo con expresa condena en costas, pues expone que el testigo ha sido claro en señalar



que presta declaración en su calidad de liquidador de seguros, labor estrictamente regulada y reservada a quienes han previamente acreditado los requisitos que exige la ley, entre los cuales se incluye conocimientos especiales, en materia de seguros y son llamados por la misma ley a pronunciarse sobre la ocurrencia del siniestro, la cobertura de éste, bajo la póliza aplicable y, el monto de la pérdida e indemnización a pagar, todo ello en conformidad a un procedimiento detalladamente reglamentado. Expresa que el testigo señaló que fue su empresa la que fue remunerada por la labor asignada a la ley, pero en ningún caso él recibió un pago por el desempeño de sus labores. En conclusión, malamente podría considerarse como inhábil a quien la propia ley ha habilitado, para emitir su experta opinión sobre el siniestro de marras.

Así señala el Decreto con Fuerza de Ley 251 en su artículo 61, que los liquidadores "deben guardar la debida independencia y autonomía en su cometido, garantizando la imparcialidad y objetividad del proceso de liquidación y velar por que sus opiniones se emitan con estricta sujeción a criterios técnicos".

CUARTO: Que, el numeral 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, establece que son inhábiles para declarar como testigos: "los que a juicio del tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto".

Al respecto, considerando que el testigo depone en su condición de liquidador de seguros, que presta servicios para un tercero y que no existe ninguna vinculación actual con la demandante y, especialmente lo dispuesto en el Decreto con



Fuerza de Ley 251 en su artículo 61, que indica que éstos “deben guardar la debida independencia y autonomía en su cometido, garantizando la imparcialidad y objetividad del proceso de liquidación y velar por que sus opiniones se emitan con estricta sujeción a criterios técnicos”, la tachada opuesta por el demandado deberá ser rechazada.

QUINTO: Que, a folio 56, con fecha 17 de diciembre de 2021, la parte demandante tachó al testigo **Cristián Gonzalo Jiménez Paredes** en base a la causales del artículo 358 números 4, 5 y 6 del Código de Procedimiento Civil, las fundamenta en que el testigo reconoció que trabaja para Aguas Antofagasta ocupando el cargo de gerente de operaciones, teniendo por tanto un vínculo de subordinación y dependencia, señalando que trabaja bajo el artículo 22 del Código del Trabajo, por lo que se puede presumir que su labor es de especial relevancia y responsabilidad dentro de la empresa, motivo por el cual se vería afectada su imparcialidad. En relación a la tachada del artículo 358 número 6 del mismo cuerpo legal, el testigo carece de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el juicio interés directo o indirecto, pues ocupa un cargo gerencial en la empresa y depende económicamente de ésta, siendo su única fuente de ingreso.

Al respecto, la parte demandada evacuando el traslado solicita su rechazo, por cuanto el artículo 358 número 4 del Código de Procedimiento Civil dice relación a los criados o dependientes, quedando restringido a estos en el caso que vivan en la casa de quien los presenta, no siendo el caso del testigo presentado. En relación el artículo 358 número 5 del Código de Procedimiento Civil, se refiere a



trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio, y el declarante señaló que quien le exigió su declaración fue el equipo legal de Aguas Antofagasta y tampoco dijo que fuese dependiente de este equipo legal. En cuanto a la causal del artículo 358 número 6 del Código de Procedimiento Civil, el testigo sostuvo que tenía un interés personal de declarar y decir la verdad en el proceso y no se puede desprender que tiene un interés económico en él.

SEXTO: Que, el mencionado testigo ha indicado que trabaja para Aguas Antofagasta, siendo el gerente de operaciones y que está sometido al artículo 22 del Código del Trabajo. Vale decir, el testigo ha reconocido ser trabajador dependiente de la empresa demandada y según lo prescrito en el artículo 358 número 4 del Código de Procedimiento Civil, que señala en lo pertinente: "*() Se entenderá por dependiente, para los efectos de este artículo el que preste habitualmente servicios retribuidos al que lo haya presentado por testigo, aunque no viva en su casa*", deberá acogerse la tacha opuesta por la demandante, pues se da la hipótesis de inhabilidad establecida en la citada norma.

Habiéndose acogido de la primera causal de la tacha invocada, no es necesario pronunciarse por las otras dos causales de inhabilidad opuestas.

SÉPTIMO: Que a folio 56, con fecha 17 de diciembre de 2021, la parte demandante formuló tacha al testigo **Bernardo Antonio Fernández Plaza**, en virtud de lo dispuesto en el artículo 358 número 6 del Código de Procedimiento Civil, fundada, en que de los dichos del testigo se infiere que es un contratista de Aguas Antofagasta en forma regular, quien paga



su remuneración, y que teniendo presente que las causales de tacha son de derecho estricto y que el testigo ha demostrado que tiene parcialidad por una de las partes, inclusive desconociendo quien es la contraparte del juicio, solicita se declare su inhabilidad.

Al respecto, la parte demandada evacuando el traslado solicitó su rechazo por cuanto atendido que el testigo en términos expresos y explícitos señaló no tener ningún interés en el juicio, por lo demás indicó no trabajar directamente para Aguas Antofagasta, sino ser contratista por lo que quien paga su remuneración no es la demandada sino la empleadora en ese momento, solicita el rechazo de la misma con costas.

OCTAVO: Que, el testigo en su declaración señaló ser prestador de servicios para Aguas Antofagasta, que en el momento de declarar tiene un contrato con la planta desaladora, pero en el tiempo del accidente era ocasionalmente, agregando que no tiene interés en los resultados de este juicio.

La causal de inhabilidad establecida en el artículo 358 número 6 del Código de Procedimiento Civil, esto es, tener el testigo algún tipo de interés directo o indirecto en el juicio que afecte su imparcialidad, exige que este interés sea de carácter pecuniario, material, cierto, y estimable en dinero, y según lo establecido de la misma declaración del testigo no concurre dicho interés ni tampoco le afecta el resultado de este juicio en los términos señalados, ya que mencionó que presta servicios para Aguas Antofagasta, sin que exista o se haya acreditado una relación de dependencia



habitual o interés económico en sus resultados, motivo por el cual la tacha opuesta deberá ser rechazada.

NOVENO: Que a folio 56, con fecha 17 de diciembre de 2021, respecto de la tacha opuesta por la demandante al testigo **Ricardo Mundaca Alfaro** según las causales del artículo 358 números 4, 5 y 6 del Código de Procedimiento Civil, fundadas en que el testigo ha reconocido que trabaja para la empresa demandada desde el año 2004, bajo el artículo 22 del Código del Trabajo, ocupando el cargo de Jefe de unidad de operación de aducciones, teniendo un vínculo de subordinación y dependencia con la demandada y, percibiendo una remuneración que es su ingreso principal. Recalca que la causal del 358 número 5 del Código de Procedimiento Civil es una causal objetiva no debiendo analizarse si el trabajador es imparcial o no, es decir, reuniéndose los requisitos de habitualidad y dependencia la tacha debe ser acogida. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema al efecto.

Además, formula tacha del artículo 358 número 6 por carecer el testigo de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el juicio interés directo o indirecto, ya que el testigo al depender económicamente y su trabajo ser su única fuente de ingreso, tiene interés en que la demandada no sea condenada.

Al respecto, la parte demandada evacuando el traslado solicita su rechazo, por cuanto el artículo 358 números 4 y 5 del Código de Procedimiento Civil y de los dichos del testigo no se infiere que tenga una relación jurídico laboral con la demandada, el testigo jamás sostuvo que se encontrase ligado a través de un contrato de trabajo,



de hecho señaló que no cumplía horario, ni que la demandada le pagara sus cotizaciones previsionales o de salud, ya que perfectamente el testigo puede prestar servicios a honorarios con lo cual no se configura la causal de inhabilidad referida. Por lo demás, respecto del numeral 5 de dicho artículo, el testigo señaló expresamente que su testimonio se lo exigieron los abogados de la demandada y él no tiene ningún vínculo de dependencia con ellos.

Señala en cuanto a la causal del artículo 358 número 6 del Código de Procedimiento Civil, el testigo sostuvo que tenía un interés personal de declarar, y de lo señalado en las tachas opuestas con relación a que si Aguas Antofagasta perdiera el pleito eso afectaría al testigo, es sólo un supuesto que no tiene fundamento, debiendo en definitiva ser rechazadas las tachas con costas.

DÉCIMO: Que considerando lo dispuesto en las normas relativas a las tachas y, en especial de los dichos del testigo que reconoce que trabaja para la demandada como jefe de unidad de operaciones de aducciones, desde el año 2004, bajo el artículo 22 del Código del Trabajo, y que dicho trabajo es su principal remuneración, es claro que su vinculación con la demandada es de carácter laboral, vale decir, lo une un vínculo de subordinación y dependencia. En virtud de lo anterior, se puede dar por establecido que el testigo es trabajador dependiente de quien lo presenta, motivo por el cual la tacha de los números 4 y 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, deberá ser acogida.

Atendido lo resuelto precedentemente y no pudiendo considerarse la declaración del testigo, no se analizará la



tacha prevista en el numeral 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto al fondo del asunto controvertido:

UNDECIMO: Que la parte demandante ha accionado en juicio ordinario de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual de Aguas Antofagasta S.A, solicitando el pago por los daños que experimentó el asegurado Ruta del Loa Sociedad Concesionaria S.A., y por consiguiente su representada Compañía de Seguros Continental, daños que fueron consecuencia directa del proceder negligente de la demandada que consistió en que una cañería de agua de su propiedad produjo un hundimiento en la carretera que fue el causante de un accidente de tránsito con resultado de muerte, como se indicó latamente en la parte expositiva de esta sentencia.

DUODECIMO: Que, por su parte, la demandada contestó la demanda solicitando su rechazo con costas, oponiendo excepción de falta de legitimación pasiva de la demandada y excepción de no existir relación causa-efecto entre el hecho y los daños, así como alegó, entre otros, que la negligencia que se atribuye a la demandada, no constituye una causa directa, inmediata, ni eficiente del daño; que el pronunciamiento del liquidador de seguros excluye la responsabilidad de la demandada; la falta de señalamiento por parte de la demandante del acto que motivó la activación de la cobertura del siniestro; la inexistencia de interés asegurable por parte de la concesionaria asegurada; incumplimiento de la concesionaria de obligaciones legales; que el siniestro que afectó a la concesionaria no era



indemnizable; confusión al demandar perjuicios por el hecho propio o daño a terceros; ausencia de culpa por parte de la demandada; improcedencia de la subrogación legal; impugnación del quantum de la suma demandada; infracción al principio de buena fe y además de manera subsidiaria, en primer lugar, alega, concurrencia de una nueva causa posterior al hecho; caso fortuito o fuerza mayor, como eximente de responsabilidad; el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad y exposición imprudente al daño.

DÉCIMO TERCERO: Que, para acreditar los hechos fundantes de la demanda, la demandante rindió las siguientes pruebas:

Documental: A folio 50, 51 , 53, 57 y 59, acompañó los siguientes documentos, a) Copia Informe número 3967 - ING.556/2019 Geotécnico Siniestro por Hundimiento pavimento en Ruta del Loa Kilómetro 10.260 emitido por don Pedro Ortigosa de Pablo, solicitado por los liquidadores de seguro Crawford Chile en Noviembre d; 2019, b) Copia Informe de Liquidación número RCV-40634, emitido por la liquidadora de seguros Graham Miller; c) Copia de Informe de Accidente Vehicular correspondiente al siniestro número 219100958 emitido por Iván Stenger Larenas. d) Documento denominado Declaración unilateral de renuncia de acciones, desistimiento, finiquito y subrogación, suscrito ante el Notario público de Calama, repertorio número 886-2020; e) Copia de Carpeta de Investigación RUC número 1910063260-0, RIT número 13652-2019, de Juzgado de Garantía de Antofagasta, caratulado Ivonne del Carmen Saravia Zeballos C/ NN.

Asimismo, a folio 58, solicitó oficios a: a)



Petrus, para que exhiba, Informe Geotécnico Siniestro número 3967-ING-556/2019, por Hundimiento pavimento en Ruta del Loa Kilómetro 10.260; b) Dirección Meteorológica de Chile dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para que informe acerca de las condiciones climáticas en el sector sur de la comuna de Sierra Gorda, entre las ciudades de Calama y Antofagasta, entre los días 18 de agosto de 2019 y 18 de septiembre de 2019.

El informe de Petrus, fue recepcionado con fecha 1 de febrero de 2022, como consta a folio 77.

Además a solicitud de la demandante a folio 58, se tuvo a la vista de este Tribunal la causa Causa Rit 13652-2019, RUC 1910063260-0, seguida ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta.

Por otra parte, a folio 55, la demandante rindió **prueba testimonial**, compareciendo: Jorge Paredes Ortiz e Iván Stenger Larenas.

DÉCIMO CUARTO: Que la parte demandada acompañó como **prueba documental** a folio 42, la siguiente: 1. reporte de inspecciones de la vieja aducción Calama Antofagasta, Inspección 25 de Septiembre del año 2019, emitido por Aguas de Antofagasta S.A; 2. Inspección áreas y equipos operaciones críticos, relativa a inspección del 13 de Agosto del 2019, emitido por Aguas de Antofagasta S.A y, 3. inspección áreas y equipos operaciones críticos, relativa a inspección del 19 de Agosto del 2019, emitido por Aguas de Antofagasta S.A.

A Folio 56, rindió prueba **testimonial**, declarando, sin tachas y previamente juramentado, el testigo Bernardo Fernández Plaza.



DÉCIMO QUINTO: Que, el tribunal, como medida para mejor resolver, ordenó a folio 90, la obtención del ebook de la causa rol C-33898-2019, del 11° Juzgado Civil de Santiago.

DECIMO SEXTO: Que, en autos se ha demandado de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual a Aguas Antofagasta S.A.

Al efecto, el artículo 2314 del Código Civil prescribe "el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito". A su vez, el artículo 2329 del mismo código señala que "por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta".

De las disposiciones transcritas, se desprenden los presupuestos de la responsabilidad extracontractual, de la cual surge la obligación de indemnizar, a saber: a) que se haya causado un daño; b) que el hecho que lo generó provenga de dolo o culpa; c) que exista un nexo causal entre el hecho doloso o culposo y el daño y d) que el autor sea capaz de delito o cuasidelito civil.

DÉCIMO SEPTIMO: Que, como se dijo precedentemente, procede analizar la concurrencia de los presupuestos de la responsabilidad demandada.

El primer elemento de la responsabilidad extracontractual es la capacidad delictual o cuasidelictual.

Al efecto, siendo la regla general que toda persona natural o jurídica es capaz de delito o cuasidelito civil, tratándose en la especie de una persona jurídica; y que no se



ha alegado en la especie alguna incapacidad, se dará por establecido el primer presupuesto de la acción interpuesta.

DECIMO OCTAVO: Que, previo a analizar el segundo de los presupuestos de la responsabilidad que se demanda, esto es, la ocurrencia de un hecho u omisión que provenga de dolo o culpa del demandado, se debe indicar que no se encuentra discutido en autos que el día 22 de septiembre del año 2019, se produjo un accidente de tránsito en la Ruta B-25, a la altura del kilómetro 10.280, perteneciente a la asegurada Ruta Del Loa Sociedad Concesionaria S.A., ubicada en el sector sur de la comuna de Sierra Gorda, entre las ciudades de Calama y Antofagasta, en el cual falleció don Carlos Manuel Adones Saravia, de 25 años de edad, copiloto del vehículo Chevrolet Corsa, conducido por Bryan Rowe Fabian, quien perdió el control de dicho vehículo, cruzando el eje demarcado de la calzada a la otra vía, colisionando frontalmente con un vehículo Ford Explorer que iba en sentido contrario.

Por su parte, la demandante ha reconocido en el libelo pretensor que al momento del referido accidente, se encontraba vinculado con Ruta del Loa Sociedad Concesionaria S.A., por un contrato de seguro, singularizado con la Póliza N°218100799, con vigencia desde el día 15 de junio de 2018 hasta el 15 de diciembre de 2019. .

Asimismo, reconoce que en virtud del referido siniestro, la asegurada -Ruta del Loa-, realizó la denuncia a la compañía de seguros demandante, con cargo a la póliza referida, y previo informe de los liquidadores del siniestro, se determinó finalmente que el monto de la *"pérdida asociada a este concepto -previa aplicación del deducible pactado-*



correspondía a la suma de \$105.000.000", que fue lo pagado por concepto de daño moral a la familia de la persona fallecida en el accidente.

A su turno, también se reconoce en la demanda, por lo que se tendrá como hecho de la causa que el día 18 de septiembre de 2019, Carabineros de Chile se percató de un hundimiento en la berma derecha en dirección al oriente de la ruta B-25, a la altura del kilómetro 10.280; y que el día 21 de septiembre de 2019, se le avisó a la asegurada de este hundimiento, quienes proceden a enviar una patrulla a revisar el sector, donde constatan la efectividad del hundimiento de la berma.

Por último, también se reconoce en el libelo, que el día 24 de septiembre de 2019, luego de comprobar que Aguas Antofagasta, había reparado el daño a la matriz que provocó la filtración de agua -y que según el actor habría provocado el hundimiento-, se pudo reparar el hundimiento de la berma.

DECIMO NOVENO: Que, por otra parte, en base a las probanzas aportadas por las partes, especialmente de la copia de la carpeta investigación, RUC 1910063260, Rit 13652-2019, se pueden establecer los siguientes hechos:

a)Que, el parte policial de fecha 22 de septiembre de 2009, da cuenta del accidente de tránsito ocurrido en la ruta B-25, a la altura del KM 20, donde colisionaron de frente los vehículos patente LHPJ-912, marca Ford, modelo Explorer, con el patente BBBT-99, marca Chevrolet, modelo Corsa; y debido al impacto entre ambos móviles, el segundo de los vehículos se proyectó hacia el costado norte de la ruta B-25. A raíz de lo anterior, los ocupantes de ambos vehículos



resultaron con lesiones de diversa consideración, falleciendo en el lugar del accidente Carlos Manuel Adones Saravia. En dicho documento, se señala expresamente: "Estado de la ruta: De asfalto en regulares condiciones de hundimiento de la ruta en el kilómetro 10.260, de la Ruta B-25".

b) Que en la carpeta referida consta que se presentó por doña Ivonne Del Carmen Saravia Zeballos y Carlos Alberto Adones Santos, querella criminal por el cuasidelito de homicidio, perpetrado en la persona de don Carlos Manuel Adones Saravia (Q.E.P.D), hijo de los querellantes, en contra de todos los que resulten responsables, por el accidente de tránsito ocurrido el día 22 de septiembre de 2019.

Se expone en dicha querella que "...()de acuerdo a registros y testimonios, con mucha anterioridad al accidente, se había detectado un hundimiento de la ruta, y sin que la sociedad operadora de la Concesión vial Rutas El Loa, corrigiera tan grave deficiencia y condición de peligro...". Más adelante indica que "... Claramente el día del accidente la zona en la que se encontraba la falla de la calzada, no estaba debidamente señalizada causando este grave accidente. Pero aún para el evento que se sostenga por los responsables, que sí existió alguna, ella no fue advertida, ni visible, ni fue establecida con la debida anticipación a la zona de conflicto, y tampoco existió señalética idónea o necesaria, para con ella evitar tan aciagos hechos".

c) Que el informe de la Sección de Investigación Policial de Accidentes de Tránsito (Siat), contenido en la carpeta de investigación ya señalada establece en su letra y), como causas del accidente lo siguiente: "...Se puede establecer



fehacientemente que el accidente investigado se produjo debido a que el participante (1) conducía el móvil no atento a las condiciones del tránsito del momento, al no percatarse del badén existente en la calzada, sin embargo se establece una segunda causa basal a la Concesión Vial Rutas del Loa, por la existencia de un badén en la vía sin ser señalado, lo cual era previsible y evitable mediante mantenciones periódicas y permanentes a ésta, toda vez que cada una de estas causas basales establecidas por sí sola no se consideran a juicio de este perito como causa del accidente, ya que debió existir necesariamente la primera para que se origine la segunda y en consecuencia el siniestro vial que investiga ese Ministerio Público”.

d) Que, los querellantes, por presentación firmada con fecha 8 de junio de 2020, se desistieron de la querella criminal en la causa Rit 13652-2019.

e) Con fecha 8 de noviembre de 2021, el ministerio público, por el accidente ya referido, formula acusación en contra de Bryan Oxman Rowe Fabian, conductor del vehículo marca Chevrolet Corsa patente BBBT.99, por los cuasidelitos de homicidio y lesiones graves.

VIGESIMO: Que, en virtud de la causa que se ha tenido a la vista como medida para mejor resolver, Rol C-33898-2019, seguida en el 11° Juzgado Civil de Santiago, se puede establecer que Rutas del Loa Sociedad Concesionaria S.A. y el Ministerio de Obras Públicas, fueron demandados, con fecha 9 de diciembre de 2019, por Ivonne del Carmen Zeballos Saravia, Carlos Alberto Santos Adones, Camila Adones Saravia y Sebastián Adones Saravia; de indemnización de perjuicios por



responsabilidad extracontractual, por el accidente de tránsito ocurrido el día 22 de septiembre de 2019. Dicho juicio terminó con fecha 11 de junio de 2020, por el desistimiento de la demanda por parte de los actores.

VIGESIMO PRIMERO: Que, atendido el mérito de la escritura pública de fecha 2 de junio de 2020, de "Declaración unilateral de renuncia de acciones, desistimiento, finiquito y subrogación", suscrita en la Notaria de Calama de Víctor Antonio Varas, bajo el repertorio número 886-2020. En ella comparecen los demandantes de la causa referida en el motivo anterior, renunciando total e irrevocablemente a las acciones y derechos que indican, a la vez que se desisten de las acciones ya iniciadas, tanto la demanda civil y la querella criminal; otorgan finiquito y subrogación sujeto al pago de la suma única y total de \$105.000.000.

VIGESIMO SEGUNDO: Que, por otra parte, a propósito de la causa civil que se ha tenido a la vista y que se indicó en los motivos anteriores, cabe hacer presente que el informe de liquidación, acompañado por la demandante a folio 51, de la empresa Graham Miller, suscrito por Jorge Paredes Ortiz, quien ratificó dicho informe, al declarar como testigo en esta causa, tras analizar el estatuto jurídico de las concesionarias y la evolución jurisprudencial de nuestro país al respecto, concluye que debido a la existencia de un "deber de seguridad" respecto de las sociedades concesionarias, que jurisprudencialmente se ha entendido va más allá del mínimo establecido en las bases de licitación (BALI), estima que la responsabilidad del asegurado- la concesionaria- *"se encuentra comprometida en este caso"*. Señala que en la demanda civil de



indemnización de perjuicios, presentada en contra de la asegurada (la concesionaria) y, en contra del Ministerio de Obras Públicas, tramitada ante el 11° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol C-33.898-2019, caratulado como ADONES con RUTAS DEL LOA S.A y otros, existe un riesgo de condena en un rango \$155.000.000 a \$165.000.000, sin descartar una sentencia por un monto mayor, producto de lo anterior, el asegurador autorizó a explorar un acuerdo transaccional global, el que finalmente terminó con un acuerdo por la suma total de \$105.000.000, lo que fue aceptado por los demandantes.

Lo anterior, también se desprende, del documento denominado Declaración unilateral de renuncia de acciones, desistimiento, finiquito y subrogación, citado en el motivo anterior.

VIGESIMO TERCERO: Que, de todos los antecedentes y hechos que se han mencionado en los motivos precedentes y a propósito de la primera y segunda excepción formulada por el demandado, esto es, la falta de legitimación pasiva y que la negligencia imputada no constituye la causa inmediata, directa ni eficiente; no puede tenerse por acreditado en autos que el accidente de tránsito ocurrido en la Ruta concesionada B-25, el día 22 de septiembre de 2019, producto del hundimiento o badén existente en dicha ruta -y que provocó que se activara la póliza de seguro y la demandante pagara el siniestro-sea imputable a Aguas Antofagasta.

Por el contrario, de los hechos acreditados en la causa se puede determinar la responsabilidad de la Ruta del Loa Sociedad Concesionaria S.A., en dicho accidente de



tránsito, como se dirá a continuación.

VIGESIMO CUARTO: Que, efectivamente, de acuerdo a los antecedentes de la carpeta de investigación de la Fiscalía de Antofagasta, unido a los informes de el liquidador, Jorge Paredes Ortiz y del informe de accidente vehicular emitido por Iván Stenger Larenas, a petición de la Compañía de Seguros Generales Continental S.A., agregado a folio 53, se desprende que el accidente de tránsito ocurrido en la Ruta B-25, a la altura del kilómetro 10.300, se debió al hundimiento de la ruta (Badén). El vehículo Chevrolet patente BBBT-99 al pasar por el baden, chocó con la parte delantera del pavimento, perdiendo el control del móvil debido a que sobrepasa el eje de la calzada, desplazándose por la otra pista contra el sentido de circulación, colisionando al vehículo marca Ford, patente LHPJ-92, que circulaba en sentido contrario.

Que fueron hechos reconocidos en el libelo por la actora, que el día 18 de septiembre de 2019, Carabineros de Chile se percató de un hundimiento en la berma derecha en dirección al oriente de la ruta B-25, a la altura del kilómetro 10.280; y que el día 21 de septiembre de 2019, se le avisó a la asegurada de este hundimiento, quienes proceden a enviar una patrulla a revisar el sector, donde constatan la efectividad del hundimiento de la berma. Y, también se reconoce en el libelo, que el día 24 de septiembre de 2019, luego de comprobar que Aguas Antofagasta, había reparado el daño a la matriz que provocó la filtración de agua -y que habría provocado el hundimiento-, se pudo reparar el hundimiento de la berma.

Vale decir, no obstante conocer el mal estado de la



ruta la sociedad concesionaria, al haber sido avisada por Carabineros de Chile, un día antes de la ocurrencia del accidente, habiendo comprobado la existencia del badén por las patrullas enviadas al efecto, procedió a repararlo recién el día 24 de septiembre de 2019, vale decir, después de tres días de conocer el mal estado de la vía, y con posterioridad al accidente que le ocasionó la muerte a uno de los pasajeros de los vehículos involucrados.

Más aún, se puede tener por acreditado en la causa que dicho desperfecto de la vía, no fue debidamente señalizado, ni advertido por la sociedad concesionaria, antes de lo que efectuara la reparación de dicho badén.

Lo anterior se encuentra acreditado por el informe emanado de la SIAT de Carabineros de Chile, en la investigación criminal llevada al efecto, que indicó: *"...una segunda causa basal a la Concesión Vial Rutas del Loa, por la existencia de un badén en la vía sin ser señalizado, lo cual era previsible y evitable mediante mantenciones periódicas y permanentes"*.

También se reconoce en el informe acompañado por la demandante a folio 53, suscrito por Iván Stenger Larenas, quien en el punto X, Fundamento de la dinámica general del accidente, en el numeral 5, indica que *"el Jefe de Retén de Carabineros de Sierra Gorda, Sr. Pedro Toro González, mediante whatsapp enviado a las 20:17 horas del día 18 de septiembre, a la Secretaria del Consejo Comunal de Sierra Gorda srta Pabla Orellana, a quien remite fotos números 1,2,3 y 5, cuyo texto es el siguiente: "En kilómetro 10.260 se hundió el asfalto y puede provocar un accidente, pusimos conos pero se los*



llevaron y los atropellan".

El informe contiene fotografías, y en ésta se observa el hundimiento de la vía, tanto en la calzada como en la berma, vislumbrándose algunos conos, pero solo en la berma.

Por su parte, el informe del liquidador acompañado por la actora, a folio 51, luego de hacer un resumen del siniestro, y de la situación judicial de la causa civil Rol 33.898-2019, ante el 11 Juzgado Civil de Santiago, se refiere a la demanda, la contestación efectuada por el Consejo de Defensa del estado y por la Ruta del Loa, indicando en su punto 3.2.2., en la parte final, a propósito de la contestación de la sociedad concesionaria que: *"No se constató que el hundimiento alcanzaba de manera peligrosa la propia calzada derecha, por lo que ni Carabineros ni la patrulla de la concesionara cortó el paso por dicho sector"*.

Y, el informe geotécnico siniestro por hundimiento pavimento en ruta del Loa Km 10.260, emanado de Pedro Ortigosa de Pablo, acompañado por la demandante a folio 50, el que incluye fotografías de los días previos al accidente, en la número 4 se muestra en la fotografía sector que se hundió en la calzada derecha, indica al pie de ésta lo siguiente: *"Sector hundido (notar que solo se restringe la circulación en la berma)"*. Vale decir, el informe repara que no se restringió la circulación en la calzada, no obstante el hundimiento existente.

VIGESIMO QUINTO: Que, en virtud de los hechos acreditados precedentemente, es necesario hacer mención al estatuto jurídico que regula la actividad de la concesionaria.

El Decreto Supremo número 900 del Ministerio de



Obras Públicas de 31 de octubre de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N°164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, en su artículo 23, establece que "El régimen jurídico durante la fase de explotación, será el siguiente:

1.- El concesionario deberá conservar las obras, sus accesos, señalización y servicios en condiciones normales de utilización, y

2.- La continuidad de la prestación del servicio le obligará especialmente a:

a) Facilitarlo en condiciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causas que originen molestias, incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a los usuarios de las obras, salvo que la adopción de medidas que alteren la normalidad del servicio obedezcan a razones de seguridad o de urgente reparación.."

A su vez, en su artículo 35 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, dispone que: "El concesionario responderá de los daños, de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de la obra o de la explotación de la misma se ocasionaren a terceros, a menos que sean exclusivamente imputables a medidas impuestas por el Ministerio de Obras Públicas, después de haber sido adjudicado el contrato".

El artículo 62 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, establece que el concesionario está obligado a "...adoptar, durante la concesión, todas las medidas para evitar daños a terceros y a personal que trabaja en la obra. Igualmente deberá tomar todas las precauciones para evitar daños a la propiedad de terceros y al medio



ambiente durante la concesión de la obra”.

VIGESIMO SEXTO: Que, al respecto, autores como Enrique Barros han sostenido que en los casos de responsabilidad en carreteras estamos frente a una especie de culpa en la organización, que no es una responsabilidad estricta u objetiva, sino una manera de atender a los deberes de cuidado que el empresario tiene para con la víctima, de acuerdo a los criterios generales de responsabilidad fundada en la infracción de deberes de diligencia, solo que éstos se refieren, en este caso a la organización de recursos humanos, técnicos y físicos que el empresario pone en funcionamiento. Por eso el defecto de conducta, que es característico de juicio relativo a la culpa, y que surge de comparar el comportamiento efectivo con el estándar de conducta debida, es condición para dar por establecida, precisamente una culpa en la organización. Señala este autor que el concepto que define el deber del servicio es la normalidad.

De tal forma, y siendo un elemento constitutivo de la culpa, la previsibilidad, lo cierto es que cabe analizar, a la luz de los hechos acreditados y las normativa legal aplicable, si la circunstancia de haberse producido el accidente de tránsito el día 22 de septiembre de 2019, por la existencia de un badén en la ruta B-25, a cargo de la Concesionaria Ruta del Loa, fue producto de la negligencia de ésta. Y, con los hechos que se han tenido por acreditados, efectivamente se puede afirmar dicha negligencia, pues teniendo conocimiento del hundimiento de la carretera a su cargo, debía suprimir las causas que originen molestias, incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a los usuarios,



como lo mandata el artículo 23 de la Ley de Concesiones.

En este caso, atendido el estado de la vía, la velocidad en que pueden circular los vehículos en dicha carretera, el hundimiento de la calzada y de la berma conocida por el asegurado, aconsejaban como mínima norma de prevención, tal como lo sostuvo el informe de la Siat de Carabineros, la advertencia a los usuarios, mediante letreros, señales y conos, con la debida antelación, del mal estado de la vía., cosa que omitió como se determinó precedentemente.

VIGESIMO SEPTIMO: Que, respecto de las obligaciones de los concesionarios de obras públicas, la sentencia de reemplazo la Excma. Corte Suprema, de fecha 29 de abril de 2013, causa rol 5.678-2012, caratulada "Medina Cárdenas Patricio Marcelo y otros con Sociedad Concesionaria de Los Lagos S.A.", en su considerando Duodécimo, establece:" (...) el conjunto de disposiciones legales y reglamentarias (cita los artículos 23 y 35 de la Ley de Concesiones), se desprende que en un régimen de concesión de obra pública fiscal recae en la concesionaria una obligación de garantizar a los usuarios la seguridad en la utilización de las obras concesionadas. En efecto, recae sobre el concesionario vial una especial diligencia en el cumplimiento de la obligación de seguridad que tiene respecto de los usuarios, desde que la normativa le obliga a facilitar el servicio en condiciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causas que originen molestias, incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a los usuarios de las obras. Se trata de la exigencia de una esmerada diligencia, la obligación de seguridad, de manera de suprimir cualquier obstáculo o alteración que impida el desplazamiento



seguro de los vehículos. Dentro del contenido de la obligación de seguridad impuesta al concesionario de obras públicas se encuentra el deber de disponer de sistemas de vigilancia permanente y sistemas de patrullaje que permitan detectar y tomar las medidas de seguridad necesarias en forma oportuna en una ruta concesionada y de ese modo de evitar daños a terceros, cobrando especial relevancia la adopción de medidas para evitar daños a la propiedad de terceros y al medio ambiente, sin que se describan o tipifiquen las medidas o precauciones que están obligados a adoptar. En consecuencia, tales medidas son todas aquellas que permitan alcanzar como resultado el evitar los mencionados daños durante la concesión”.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, no obsta a la responsabilidad de la empresa Ruta del Loa, la circunstancia señalada por la actora, en cuanto a que el badén se produjo por una filtración de agua en las instalaciones de la demandada Aguas Antofagasta, pues si bien el informe acompañado a folio 50, emanado de Pedro Ortigosa concluye que “el hundimiento ocurrido en el km 10.260 de la calzada derecha de la Ruta 25 (Ruta del Loa), se debe al colapso del suelo natural arenoso al destruirse gran parte de los contactos cementados entre partículas generados por la sal, los cuales desaparecieron al disolverse la sal debido a una filtración de agua. La filtración provino de una falla en la unión de una tubería de agua emplazada a unos 30 mts al sur de la Ruta 25 y que corre paralela a ella”.

Lo cierto es que con independencia de las causas que originaron el badén y que no resultan a juicio del tribunal



concluyentes, pues el mismo informe indica en su punto 3 que es muy difícil predecir el asentamiento (hundimiento), por acción del agua en suelo arenoso con porcentajes anómalos de sales solubles del 20 % como los registrados en torno al sitio del siniestro; lo acreditado en este caso, es que se produjo un hundimiento de la calzada a cargo de la concesionaria; que ésta fue informada de dicho desperfecto y; que ésta no obstante haber comprobado la existencia del badén, no lo reparó de inmediato, ni tampoco advirtió a los usuarios, mediante las señalizaciones y avisos necesarios, de manera de suprimir los factores de peligro.

VIGESIMO NOVENO: Que, como se ha razonado, si bien se ha acreditado, de los presupuestos de la responsabilidad extracontractual, la capacidad y al daño, sin embargo, no se logró acreditar que el hecho imputable a dolo o culpa por parte de la demandada AGUAS ANTOFAGASTA, fuera el que ocasionó el daño. Es más, se pudo establecer que el hecho directo que ocasionó el accidente que originó el daño a la demandante, fue fruto de la negligencia de la concesionaria, motivo por el cual no concurriendo este presupuesto la demanda de autos deberá ser rechazada.

TRIGÉSIMO: Que, según lo expuesto en el considerando precedente y habiendo alegado la demandada falta de legitimación pasiva, y la excepción de no existir relación causa-efecto entre el hecho y los daños, se puede dar por establecido, de la prueba analizada de forma legal, que efectivamente la concesionaria no cumplió con las obligaciones legales, al demorarse en reparar la berma, sin que en ese lapso, se adoptaran medidas de seguridad o de reparación del



tramo afectado, por lo que corresponde acoger la excepción de falta de legitimación pasiva en dicha parte, como asimismo, la alegación de que la presunta negligencia que se le imputa a Aguas Antofagasta, constituya la causa directa, inmediata y eficiente del daño, pues como se señaló, consta en autos que la causa directa del daño demandado se debió al badén existente en la ruta concesionada de responsabilidad de la concesionaria, motivo por el cual la excepción de falta de causa-efecto entre el hecho y los daños deberá ser acogida.

TRIGESIMO PRIMERO: Que, de lo señalado en los considerandos anteriores, la acción interpuesta no podrá prosperar, motivo por el cual la demanda deberá ser rechazada, resultando innecesario pronunciarse sobre las demás alegaciones y excepciones formuladas por el demandado.

TRIGESIMO SEGUNDO: Que la prueba no analizada pormenorizadamente, en nada altera lo razonado, en especial, la prueba testimonial de la demandante, cuyos testigos ratificaron los informes por ellos evacuados, documentos que fueron analizados y ponderados al resolver la controversia.

Y VISTO además lo dispuesto en los artículos 1698, 1713, 2314 y siguientes del Código Civil; artículos 23 y 35 del D.S.900, Ley de Concesiones de Obras Pública, Art. 62 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas; 144, 160, 170, 384 y 426 del Código de Procedimiento Civil; **se declara:**

I. Que **se rechaza** la objeción de documentos alegada por la demandante en su presentación de folio 47.

II. Que se **rechaza** la tacha formulada por la demandada a folio 55, respecto del testigo Jorge Paredes



Ortiz.

III.- Que **se acogen** las tachas formuladas por la demandante, a folio 56, respecto de los testigos Cristián Jiménez Paredes y Ricardo Mundaca; y se rechaza la formulada al testigo Bernardo Fernández Plaza.

IV. Que, **SE RECHAZA** la demanda interpuesta por la Compañía de Seguros Generales Continental S.A. en contra de Aguas Antofagasta S.A, a folio 1, en todas sus partes, acogándose las alegaciones de la demandada de falta de legitimación pasiva y la falta de causa inmediata, directa y eficiente.

V. Que se condena en costas a la demandada, por haber resultado totalmente vencida.

Regístrese, Notifíquese y Archívese en su oportunidad.

Rol N°422-2021

Dictada por doña **Susana Tobar Bravo**. Juez Titular.

CERTIFICO: Que, con esta fecha se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. Antofagasta, uno de septiembre de 2022.-



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PKYJXBEHSSD

